

VILLAS MISERIA Por Eduardo Blaustein

Parte 1

La invención del fuego.

“El recuerdo terrible de Villa Basura, deliberadamente incendiada para expulsar con el fuego a su indefenso vecindario, era un temor siempre agazapado en el corazón de los pobladores de Villa Miseria. La noticia de aquella gran operación ganada por la crueldad, no publicada por diario alguno, corrió no obstante como un buscapiés maligno”.

Así abre la primera página de la novela más conocida de Bernardo Verbitsky, *Villa miseria también es América*. Abre con la expulsión por fuego y termina con una secuencia ferrocarrilera en la que nuevos humildes venidos del interior argentino se aparecen en la gran ciudad con sus petates y esperanzas, con o sin conocimiento de lo que pueda esperarlos.

El embrión de la novela fue una serie de notas que Verbitsky publicó en 1953 en el diario en el que trabajaba, *Noticias Gráficas*. La serie, a la vez, fue producto de lo que el periodista y escritor apenas atisbaba a ver desde lo alto del tren que lo llevaba cada día al trabajo: un asentamiento semiescondido, laberíntico, la Villa Maldonado. Comenzó a pasearse por la villa durante los días francos y a interesarse por la vida de sus vecinos. La novela salió al mercado en los años sesenta y fue, además de un éxito editorial, algo así como la desclandestinización del tema. Se atribuye a Verbitsky -desde que publicó aquella primera serie de notas- la invención misma de la expresión “villa miseria”. Según explicó alguna vez su hijo Horacio, su padre se inspiró en un verso del poeta negro -o afroamericano, si se prefiere- Langston Hughes: “Yo también soy América”.

La cita de la novela tiene que ver con lo que encierra su primer párrafo: una larga historia, y cíclica, que no sólo puede referir a la época en que fue publicada sino también a lo ocurrido a partir del golpe militar de 1976 con las villas miseria de la Capital Federal y a lo sucedido hasta hace muy poco tiempo. Cuando la dictadura militar tomó el poder, las estadísticas oficiales, siempre escurridizas, indicaban que en Capital vivían más de 225 mil villeros. Echada al bulto, la cifra castrense incluía a nueve mil habitantes de Núcleos Habitacionales Transitorios construidos por el propio Estado y a otros siete mil que también vivían en barrios construidos por políticas oficiales. Hacia fines de 1980, las autoridades mostraban como uno de sus mayores éxitos de gestión y de imagen otras estadísticas que mostraban que la población villera se había reducido a poco más de 25 mil personas. En el lapso transcurrido, hubo sangre y hubo fuego. Pasaron los años y quedó demostrado que los “éxitos” de la política erradicadora -diseñada primero en mesas de arena y llevada a cabo entre gases lacrimógenos, con camiones de basura y tanquetas- serían más que relativos. Hoy la población villera porteña ronda las 130 mil personas.

En un artículo publicado en 1985 en la revista *Nueva Sociedad*, el periodista y escritor boliviano Ted Córdova-Claure aludía a “la calcutización de las ciudades latinoamericanas” y, en ese contexto, a un enigma particular:

“¿Cómo hacen los vendedores ambulantes que proceden de la marginalidad para sobrevivir con los pocos centavos que recolectan? Este es apenas uno de los misterios de la economía marginal en las ciudades latinoamericanas, un misterio que los planificadores, ya sean desarrollistas, keynesianos, friedmanianos o marxistas, prefieren no enfrentar. La marginalidad es el moderno e implacable Waterloo de capitalistas, tecnócratas, dictadores y hasta revolucionarios”.

Si se reemplaza la idea particular del vendedor ambulante por una realidad más vasta, la de las villas miserias, el interrogante, sólo supuesto, es aún mayor. Las villas miseria capitalinas han sabido sobrevivir a todo porque son parte inherente de una historia económica y social dinámica, imposible de aislar y aniquilar en laboratorio. Son también parte de la vida de la ciudad, parte de su fuerza laboral. Aún cuando la ciudad quiera verse blanca, bonita, pulida, moderna y eficiente y aún cuando pretenda quitarse de encima “el problema de las villas”. Ese planteo de las villas como problema data por lo menos de medio siglo atrás. Y buena parte de las políticas oficiales, cuando para *solucionar el problema* impulsaron la erradicación, fracasaron. Ya fueran políticas medianamente democráticas y amistosas o esencialmente brutales, como las que se expondrán en estas páginas. Siendo que durante la dictadura militar se aplicó el trámite sencillo de la fuerza bruta en función de todos los “fracasos anteriores” (debidos, según el diagnóstico oficial, a la blandura, la ineficiencia, la negligencia o los enjuagues de los políticos), es conveniente, antes de dar cuenta

de la historia desencadenada en 1976, resumir la historia anterior. El Proceso de Reorganización Nacional no llegó a la Argentina en plato volador. Las villas miseria tampoco.

Los orígenes.

Los primeros datos acerca de la conformación de villas miserias en la ciudad de Buenos Aires no refieren a pobladores de tez oscura venidos del interior sino a hombres y mujeres europeos, inmigrantes como los primeros. En 1931 el Estado dio refugio a un contingente de polacos en unos galpones vacíos ubicados en Puerto Nuevo. Dos años atrás había estallado la crisis mundial y no es de extrañar que al primer nucleamiento se lo llamara Villa Desocupación -todo un dato social e histórico- ni que al año siguiente se conformara otro con un nombre que sería el reverso semántico exacto: Villa Esperanza. Como efecto de la Gran Depresión el país iniciaba dificultosamente el proceso de sustitución de importaciones. El incipiente desarrollo industrial de Buenos Aires intervenía como polo de atracción de migrantes internos. A la inversa, las geografías de las que venían esos inmigrantes, sus economías regionales, entraban en crisis y así sigue siendo hasta el día de hoy, setenta años después.

El hecho de que la expansión de las primeras poblaciones villeras en las cercanías de Retiro se acelerara a fines de los '40 tiene a la expulsión/industrialización como explicación general y más puntualmente a la actividad ferroviaria y portuaria que también entraría en crisis en años más recientes. Pero todavía en 1940, cuando el gobierno proveyó de viviendas precarias a un grupo social muy castigado, esos habitantes pioneros de lo que sería la villa de Retiro eran de origen italiano y el barrio se conocería durante decenios como "Barrio Inmigrantes". Unas cuantas manzanas más al norte, con el apoyo del gremio de La Fraternidad, comenzaron nuevos asentamientos de familias de ferroviarios en los márgenes de las vías del Belgrano. Ese extremo norte de la villa de Retiro sería Villa Saldías. Más tarde llegaron nuevos pobladores, bolivianos y habitantes del noroeste argentino, muchos de ellos zafreros, rechazados en los ingenios azucareros cuando comenzaron a endurecer sus reclamos sindicales.

También en los '40, en la zona capitalina que se conocía como Bañado de Flores, lo que sería el Parque Almirante Brown, comenzaron a instalarse viviendas precarias alrededor de un barrio de emergencia que, como los primeros de Retiro, tuvo origen oficial: el barrio Lacarra. En cuanto a la villa de Bajo Belgrano, cuyos primeros habitantes, en los años '20, fueron vendedores ambulantes, changarines y obreros no calificados que ocuparon una manzana, con los años ocuparía unas once hectáreas.

El primer plan de eliminación.

Hacia 1955, año de la Revolución Libertadora, a las villas de Retiro, Bajo Belgrano y Lugano había que sumar una larga serie de nuevos núcleos villeros, algunos bautizados con nombres picarescos o maliciosos que quedarían incorporados en ciertos lugares ambiguos de la cultura popular: Villa Fátima, Villa Piolín, Villa Medio Caño, Villa Tachito, Villa 9 de julio. En abril de 1956 la recién creada Comisión Nacional de la Vivienda (CNV) elevó al Poder Ejecutivo un censo que indicaba que en la ciudad existían 21 villas, habitadas por 33.920 personas. En toda el área metropolitana se hablaba de 78.430 vecinos villeros. Cuantificar la población villera significaba, por primera vez y en el mismo acto, asumir el tema de las villas como "problema". A renglón seguido, la solución ideada, por entonces original, era la de la erradicación.

Al menos en su concepción inicial aquel primer plan de erradicación intentaba dar alguna respuesta social. Las dosis de violencia en los planes sucesivos se fueron haciendo progresivamente ominosas con los años, con un primer ensayo general durante el Onganiato y como un plan de terrorismo urbanístico sistemático a partir de 1976.

En un libro del arquitecto Oscar Yujnovsky que ya tiene algo de clásico, *Claves políticas del problema habitacional argentino. 1955-1981*, se destaca "la preocupación social de los informantes de la CNV" cuando proponían por ejemplo que los conjuntos de viviendas en los que debían ir a parar los erradicados fueran concebidos como unidades vecinales con sus centros comunales. Los nuevos asentamientos debían ser cercanos a los medios de trabajo, de transporte, con su escuela primaria y hasta con un centro de abastecimiento y artesanado. Los centros comunales, decían esos funcionarios, "constituyen la esencia del barrio. En él y por él, con la colaboración de la asistente social, se deberán crear las juntas vecinales, que reemplazarán con el tiempo a la administración oficial en el manejo y organización de tareas comunales y presentarán al respectivo municipio sus pedidos y sugerencias".

Aquel ambicioso plan fue posiblemente la primera demostración de los riesgos y de los fracasos de las intervenciones estatales, especialmente las dirigidas meramente desde arriba. Pese a cierta sensibilidad

inicial en el planteo, el proyecto no dejaba de ser un intento de imposición vertical al que la población villera debía subordinarse, antes que “readaptarse”. Otras buenas intenciones como la de brindar presuntas facilidades de pago a los erradicados para que ocuparan sus nuevos hogares, dejaban afuera a buena parte de los supuestos beneficiados. Finalmente, a lo largo de siete años el plan elaborado para cubrir las necesidades habitacionales de 34 mil pobladores apenas si terminó en la construcción de 214 viviendas para 1.284 personas, a razón de seis en viviendas de 50 metros cuadrados.

Este primer hito en la historia nunca acabada de los intentos de erradicación contendría también otro fenómeno inherente a las villas, algo así como la cara oculta que el Estado -y a menudo la sociedad oficial- no quiere ver. La realidad de las villas incluye a la historia que van construyendo quienes las pueblan. Primero es la llegada de grupos que comparten historias, identidades y culturas afines. Luego los problemas comunes -laborales, barriales, educativos- de todos los días y la construcción de nuevos lazos. De a poco el surgimiento de clubes de madres, las juntas vecinales que buscan mejorar las condiciones de vida, las entidades de recreación y deportes. Con el tiempo, formas de organización cada vez más abarcadoras y colectivas que comienzan a conformarse como contrapoder frente al Estado y sus instituciones a medida que éstas se convierten en interlocutor y, muy a menudo, en enemigo. Así, al primer plan erradicador de 1956, correspondió la constitución, dos años después, en 1958, de la primera Federación de Barrios y Villas de Emergencia que articuló las comisiones vecinales de diversas villas porteñas y en la que asomó alguna presencia tanto de militantes del Partido Comunista (de la Unión de Mujeres Argentinas en primer lugar) como de cuadros de la incipiente Resistencia Peronista o, en el caso de la Villa 31 de Retiro, de los sindicatos portuarios intervenidos, estrechamente ligados a la realidad laboral de los barrios cercanos.

De manera tal que en el fracaso del primer intento erradicador no sólo hay un revés “de gestión” o “cuantitativo” sino el asomo de nuevos desafíos a ser tenidos en cuenta, ligados a la articulación entre las instituciones y los villeros como actores sociales y a las mediaciones que deben establecerse. Lo que comienza a perfilarse en ese primer fracaso es una historia pendular en la que el Estado pasa de aceptar amistosamente o a regañadientes a las organizaciones villeras como interlocutoras, a intentar cooptarlas o a pasar por encima de ellas destruyéndolas y a menudo creando otras nuevas, funcionales a sus necesidades. O en los casos más extremos de las experiencias golpistas de 1966 y 1976, a pasarles por encima con topadora y tanqueta.

Lo que empezaba a fines de los años '50 con el intento de erradicación era apenas el comienzo de una historia muy extensa, cíclica y accidentada que pasó de la construcción de muros perimetrales que pretendieron “ocultar la vergüenza” a los incendios intencionales a los que refiere la novela de Bernardo Verbitsky. Durante los lapsos de gobiernos constitucionales, esas políticas nunca dejaron de tener como norte la idea de la erradicación final. A la vez, por la propia dinámica y fuerza de la realidad, muy a menudo esas políticas se “ablandaron” hasta adoptar vías de resolución de conflicto más o menos consensuadas y humanas, mejoras en la infraestructura de los barrios y también numerosas “soluciones” que de provisórias pasaron al rango de lo eterno.

Primera presentación: Juan Cymes.

Su nombre es relativamente legendario no sólo para la población villera de Capital sino para los villeros de La Matanza, como los del barrio Las Antenas. Como él mismo dice, esa zona villera de la provincia no es más que la continuidad natural de otras villas de Capital, con ejes de salida que parten, entre otras vías posibles, de la avenida de los Corrales. A los efectos de estas páginas, afirmar que el nombre de Juan Cymes es largamente conocido por los dirigentes villeros porteños (y por los numerosos funcionarios que lo sufrieron) lleva implícito el hecho de que el hombre no tiene por qué ser conocido para la sociedad no villera. La incomunicación entre ambos mundos hace a la esencia del tema.

El apellido, aclara él, es de origen turco. Pero él mismo, legendario también por lo locuaz, se apresura en aludir a su madre de origen polaco y sin embargo criollista y tanguera. Juan Cymes nació en un conventillo, no el de la calle Olavarría, sino en uno de Mataderos. Dice haber mamado de su madre una cierta sensibilidad que va de lo barrial solidario a lo nacional-popular y dice que ya a los quince, en ese mismo conventillo, era líder de pequeñas causas. Lo irá reiterando y subrayando en una conversación de cinco horas en un bar de San Juan y Entre Ríos: crianza en barrio obrero, picados en los potreros, con los vecinos de las villas cercanas, “cero discriminación”. Tanguero al límite de lo obsesivo: fundador del Círculo de Amantes del Tango, animador de charlas y espacios radiales, Juan Cymes bautizó a sus dos hijos Homero y Pichuco y se jacta de retener en la memoria la cifra exacta de 1200 letras desde el primer verso al último. Su fracaso en

el programa Odol pregunta, se excusa, fue producto del azar.

De manera tal que Cymes, cuyo testimonio aparece aquí como el primero de dirigentes villeros que consiguieron sobrevivir al Proceso, escapa al estereotipo del villero morocho y correntino, santiagueño o de Jujuy. Y si es el primero en ser citado es porque Cymes ya estaba en Capital en los años de la Libertadora y porque fue entonces o poco después que tuvo su primer contacto con las villas como militante social. Ocurrió el día en que un amigo del barrio de Lugano, compañero de trabajo en la fábrica Camea del entonces ignoto metalúrgico Lorenzo Miguel, le pidió ayuda para solventar cierto problema que se presentaba en la villa Cildañez. Por entonces el arroyo corría sin tubo, a cielo abierto.

Eran también las épocas de la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, épocas arduas, y parece ser que en la Cildañez había cierto oficial de policía que tenía por costumbre sobrepasarse en el ejercicio de la autoridad. Así que Juan Cymes acompañó a su amigo metalúrgico hasta la villa. Ambos, junto “a todo un grupo de pendejos de 18, 19 años”, convocaron a reunión de vecinos y mediante el sencillo exhorto de “no dejarse atropellar por un hijo de puta”, sembraron la semilla de una primera comisión vecinal y provisoria. Después se convocó a comicios.

Cymes merodeaba por entonces las juventudes de la intransigencia radical, a pocos pasos de los resistentes peronistas y siguiendo como se podía la línea Yrigoyen-FORJA-Lebensohn. Su merodeo fue más o menos efímero: de la UCRI lo expulsaron. Al poco tiempo fundó su primer ateneo -“El Combatiente”- y ahí nomás alcanzó a entrevistarse y abrazarse en Punta del Este nada menos que con Ernesto Guevara. A punto estuvo de enlistarse en los planes del Che para crear uno, dos, miles de pequeños Vietnam. Cuando primereaban los '60 y despuntaban ya las primeras radicalizaciones ideológicas, Juan Cymes optó por una cierta forma de la sensatez que consistía en no despegarse ni de las bases ni de los territorios a los que se pretendía liberar. En los '60 se negó a tener hijos con su primera compañera. Sólo porque no entendía a los que pretendían hacer una Revolución con hijos a costas, dados los dolores de cabeza domésticos que suele aparejar la venida de los hijos. La ausencia de hijos, las idas y vueltas de su vida militante, apuraron la separación de su mujer. A su segunda esposa la conoció mucho después viviendo en la villa 15 o Ciudad Oculta, una denominación que él detesta, por discriminadora. “¿Oculta de qué? Quién se oculta?”. Cuando los tuvo, Homero y Pichuco se criaron en las villas.

De Frondizi a Onganía.

Junto a la implementación de planes de construcción de barrios financiados por el Banco Hipotecario Nacional, el período de gobierno de Frondizi-Guido fue artífice de uno de esos proyectos de construcción provisoria que en su momento hizo escuela: el de viviendas provisorias prefabricadas en metal. Por su forma abovedada, sus ondulaciones y su precariedad, también por sus dimensiones minúsculas, esas casas fueron bautizadas como los “medios caños”. Como en la administración anterior y las siguientes, a ese gobierno no le faltó su plan erradicador, el PEVE o Plan de Erradicación de Villas de Emergencia que dependía del ministerio de Obras Públicas de la Nación. Ese plan nunca se llevó a cabo. Al mismo tiempo, durante ese período, el gobierno municipal reconoció a la Federación de Villas de Emergencia como interlocutor legítimo y los villeros no sólo pudieron hacer conocer sus reclamos a través de la Federación sino también en el Concejo Deliberante, especialmente a través de los partidos socialista, demócrata-cristiano y comunista. Al punto que se iniciaron una serie de mejoras parciales en distintos barrios, especialmente en materia de provisión de agua, luz y conexiones cloacales.

Esos planes puntuales no daban abasto para el crecimiento de la población villera, que hacia 1963 ya era de 42.462 personas en 33 nucleamientos (la cifra no incorpora los cinco mil habitantes del albergue Warnes, demolido casi treinta años después). La cuestión villera comenzaba a formar parte de las prioridades declaradas por cada administración municipal. Una de las consecuencias fue la consolidación del rol de la Comisión Municipal de la Vivienda, a la que progresivamente y dependiendo de la época, se le irían asignando buena parte de las tareas relacionadas con la cuestión de las villas, incluyendo las peores.

Algunos rasgos de pendularidad entre la opción erradicadora y las políticas sociales consensuadas siguieron vigentes durante el mandato de Arturo Illia. La Federación de Villas apoyó inicialmente al gobierno y pudo consolidarse gracias a la existencia de un marco político tolerante, mucho menos represivo que el de los años anteriores. También fue permeable y flexible a la hora de establecer alianzas con algunos partidos políticos y con la Confederación General del Trabajo. Pese a ese clima de diálogo, la relación de la Federación con el municipio fue más conflictiva. En agosto de 1963 la Federación entregó al presidente Illia un pliego de reivindicaciones. Fue la primera vez que un jefe de Estado recibió de manos de los villeros una

síntesis de los atropellos acumulados y seguramente la primera en que a ese nivel quedó transparentado un salto cualitativo en las demandas de ese sector de la población ante el Estado. En aquel documento la Federación pedía:

“1) Que nadie sea desalojado de las villas sin antes ofrecerle una vivienda decorosa;

“2) que se respete la inviolabilidad del domicilio;

“3) que la Municipalidad, Vialidad y el gobierno faciliten elementos para mejoras, para lo cual todos los vecinos pondremos mano de obra completamente gratuita;

“4) que se derogue en forma inmediata el decreto 4805/63 y se suspenda la expulsión de nuestros hermanos paraguayos, chilenos y bolivianos...”.

El documento contenía un par de reivindicaciones centrales más: que para la adjudicación de viviendas en nuevos barrios se creara una comisión lo suficientemente participativa como para evitar favoritismos “y dar prioridad a las familias más necesitadas” y que el gobierno cediera a la Federación un local en el que poder funcionar. El gobierno aceptó las demandas y en noviembre de 1964, en base a un proyecto de un diputado de la UCRP, se aprobó la ley 16.601 de construcción de viviendas “con la finalidad de erradicar definitivamente las actuales villas de emergencia en todo el país”.

El plan nuevamente contemplaba programas de financiamiento accesibles, con préstamos de entre quince y treinta años. Un año después, y a nivel municipal, se sancionó un Plan Piloto, una de cuyas disposiciones principales era la de estimular la creación de “centros de Comunidad” en cada una de las villas. Los centros -creados desde el aparato estatal, subordinados a las decisiones de la CMV- debían ser ámbitos de organización y desarrollo de condiciones que posibilitaran la erradicación. Estaban pensados para ganar el apoyo de los propios villeros mediante un funcionamiento a tres niveles: social, médico y educacional. Así como a fines de los '50 sobrevolaba la peculiar idea de la “readaptación”, en este caso el objetivo era el de engendrar entre los habitantes un “cambio de mentalidad”, una superación del “quedantismo estático” responsable de que los villeros vivieran en villas. Al cabo del tiempo, se implementó una serie de mejoras en las condiciones de vida en numerosos barrios, no sólo en materia de infraestructura sino también de construcción de locales comunitarios, dispensarios, escuelas, trazado de calles, alumbrado, etc.

Existió también un Plan Piloto para la Erradicación de las Villas de Emergencia 5, 6 y 18 del Parque Almirante Brown, que incluía obras de drenaje, de recuperación de terrenos y el entubamiento del Cildáñez. Para cuando se produjo el golpe de Estado de Juan Carlos Onganía, ese plan sólo había llegado a cumplirse de manera parcial. En un marco de crisis política -el peronismo, proscripto en las elecciones presidenciales, triunfó en los comicios que se realizaron en el '65- las relaciones entre la Federación de Villas y las autoridades volvieron a agriarse, en el habitual marco de amenazas de desalojos, de incendios intencionales, pero también, de la articulación endurecida entre representantes villeros y sectores del peronismo.

La Revolución Argentina, llegada para quedarse por cuarenta años, no encontró en la Federación de Villas una organización lo suficientemente sólida como para que ésta pudiera resistir la embestida militar. Pero el acercamiento entre el incipiente movimiento villero, los partidos y diversos sectores del peronismo fue importante en la obtención de conquistas y para engendrar un cierto nivel de combatividad. Como dato simbólico de lo que los villeros empezaban a representar en el imaginario social, y contra corriente de las actitudes estigmatizadoras, en la Villa 31 de Retiro ya se había instalado, en 1961, el padre Carlos Mugica. En los barrios Comunicaciones e YPF ya estaban presentes algunas organizaciones asistenciales y educativas.

Segunda presentación: Magtara Feres.

La señora tiene 69 años y los lleva muy bien. Aparece coquetamente arreglada y vestida, el pelo corto, mucha soltura, muy agradable. Aunque maneja un discurso aparentemente candoroso, con algunas huellas en la entonación de origen correntino, es dueña de una memoria y una lucidez prodigiosas. El apellido Feres es de origen libanés, cuenta, y fueron su papá y 25 parientes los que se vinieron a la Argentina, previa escala en Curitiba, Brasil. El nombre de pila Magtara es la castellanización, o más fielmente la deformación de Muftara, que quiere decir “la Elegida”. El padre de la Elegida y de otros ocho hijos fue -dice ella- el típico turco de vender en carro: *Beine, beineta, jabún, jabuneta. ¿Combra, baisano?*

A oídos de los Feres, criados en Paso de los Libres, llegaron los ecos de las leyendas de Buenos Aires, tierra de oportunidades, y hasta aquí se vinieron, en busca de las fábricas y el trabajo. Magtara se vino ya

casada con un maestro de escuela y tres hijos. El mismo cura que ofició en el casamiento les consiguió un primer chalecito en Claypole. El matrimonio Feres se anotó en un plan de viviendas en Avellaneda. Se anotó y se sentó a esperar. La vivienda nunca salía. Pasaron los meses y supieron cómo eran las cosas en la gran ciudad -“No sabíamos que había tanta trampa”-, descubrieron que para acceder a viviendas oficiales u oficiosas había que coimear. El marido maestro de Magtara había enfermado y ya no pudo trabajar en las escuelas. Comenzó a hacer changas contables para un restaurante, alfabetizó adultos, escribió cartas para quienes no sabían escribir. Su pregunta -“¿Cómo que no sabés leer?”- se hizo rutinaria. Empezó a atender chicos de día y a sus padres de noche. Magtara, mientras tanto, hacía una vida fiel a todos los catecismos que le habían enseñado desde chica.

Entre alfabetizaciones, catecismos y obras de bien, los Feres fueron beneficiados en 1960 con una vivienda en el complejo cercano a Cobo y Curapaligüe, el Barrio Rivadavia, construido por el Banco Hipotecario. No conocían el barrio ni a sus habitantes. Los habitantes sí se conocían entre ellos, mucho provenían de las villas de Mataderos. Así que llegaron a la casita en calle de tierra con aprehensiones y en el peor momento posible, de noche y con frente de tormenta. La guardia de infantería estaba plantada al borde del barrio, con las instrucciones de rutina: echar fieramente a los desconocidos. Les pidieron los documentos y Magtara estrenó su flamante condición de vecina peleadora, aunque todavía no le dejaban estrenar la propia casa:

-¿Cómo quiere que encuentre los papeles de la casa en esta oscuridad?

Entonces intervino el azar, uno de los de la Infantería resultó ser un viejo conocido de Corrientes que les franqueó el paso. La primera impresión no fue del todo alegre: la casa había sido intrusada, los vidrios estaban rotos. Entraron con farol de noche, no había ni luz ni agua, sí una rata muerta de buen tamaño. Se habrán mirado aquella noche los Feres y los hijos de los Feres, pendientes de la oscuridad, la tormenta, la ausencia de agua, la rata muerta, los vidrios rotos y los vecinos. Pasó lo que no tenían previsto: los vecinos se acercaron para darles una mano.

-Yo tenía miedo de no acostumbrarme. Pero los vecinos fueron muy dulces, muy buenos.

Esta pequeña historia de un barrio construido por el Banco Hipotecario y que el Proceso militar, a la hora de demoler y erradicar, denominó villa, transcurrió hacia 1960. Un par de años después, Magtara Feres peleaba con sus vecinos contra las huestes del Warnes, interesadas en ocupar la mitad del barrio que, al borde de Cobo y Curapaligüe, todavía estaba a medio construir. En el lapso que va de 1963 a 1966, los villeros porteños se hicieron 70 mil.

Parte 2.

Plan General de Operaciones.

“...Hoy, como en todas las etapas decisivas de nuestra historia, las Fuerzas Armadas, interpretando el más alto interés común, asumen la responsabilidad irrenunciable de asegurar la unión nacional y posibilitar el bienestar general, incorporando al país los modernos elementos de la cultura, la ciencia y la técnica, que al operar una transformación substancial lo situén donde le corresponde por la inteligencia y el valor humano de sus habitantes y las riquezas que la providencia depositó en su territorios.

Tal, en apretada síntesis, el objetivo de la Revolución”.

Mensaje de la Junta Revolucionaria al pueblo argentino. 28 de junio de 1966. Derrocamiento de Arturo Illia.

Tercera presentación: Teófilo (Johny) Tapia.

Hubo una lejana época en el país, hasta los primeros '70, en la que medio mundo consideraba importante usar la expresión “yanquis” para referirse con algún orgullo y algún desdén a los Estados Unidos, a los nacidos en ese país, a todo lo que saliera de ese país. Los villeros no usaban tanto esa expresión sino una más modesta y más simpática, salida seguramente de las películas y las series de cowboys: ellos decían “los johnis”, o “los johnies”. El amigo Teófilo Tapia, oriundo de Jujuy, no recuerda exactamente dónde fue que comenzaron a llamarlo Johny, puede que haya sido en el puerto, en donde trabajó la mitad de su vida, porque así le decían a los marineros de otras banderas. La cuestión es que a él se lo conoce como Johny Tapia y que sonríe de buen grado cuando se le rescata la memoria de aquel maravilloso jugador peruano que, como él, se

llamaba Teófilo, y de apellido Cubillas.

Johny nació en Jujuy capital hace 59 años, hijo natural de doña Dominga Tapia, trabajadora doméstica. De chico se fue con su madre a Mendoza en un plan que no fue golondrina sino más bien todo terreno. Se fueron a trabajar a la viña pero también a la cosecha del durazno, de la manzana, del tomate de chacra y de todo lo que diera la tierra. Trabajó en todo eso y también se hizo tiempo para terminar la primaria en Mendoza. Tenía 22 cuando los vientos de la emigración lo arrancaron por segunda vez del lugar que pisaba. La madre se quedó con otro hijo en Mendoza y él se vino a Buenos Aires con la esperanza universal que en su caso resume así: “La esperanza de tener más estudios, de profundizar un poco, de lograr algo”. Corría 1963 y se subió a El Libertador, aquel tren que, como El Serranoche que iba a Córdoba o el Estrella del Norte que iba a Tucumán, se anunciaba por los megáfonos de Retiro, cuando en Retiro todos los andenes tenían vida. Bajó en Retiro ese día de 1963, nublado y con lluvia. Con el compañero que tenía a sus parientes en la Villa 31, subieron al 143, más todos los patates.

La primera changa fue la de peón y lavacopas en un restaurante. La segunda la de vendedor en carro de helados Noel, por la zona de Palermo. Después se metió en el puerto, en la estiba. Conoció las huelgas del '66, se afilió al SUPA, le dieron su documento de estibador. Desde entonces hasta hoy se supone que Johny Tapia trabajó toda su vida en el puerto, mixturando ese trabajo con otros en la construcción o yéndose hasta Puerto Madryn, a obras de montaje. Pero sólo debe *suponerse* que Johny sigue trabajando en el puerto de Buenos Aires. Desde 1995, Año de Privatización, que Johny está suspendido. Una empresa denunciada por vaciamiento lo dejó fuera de carrera, a él y a unos cuantos más. Como la estación Retiro, hoy el puerto tiene mucha menos vida que la que supo tener. Asunto de temer si se considera lo resumido más atrás: que en la villa de Retiro abundaban los portuarios tanto como los ferroviarios. Las esperanzas actuales de Johny Tapia son tan modestas como la época: que la Justicia les dé la razón a los trabajadores suspendidos, poder cobrar la jubilación aunque la empresa que lo suspendió no haya hecho los aportes.

Mientras tanto vive en la villa de Retiro y también en el barrio Illia, donde está su familia. En Retiro se encarga de hacer el trabajo social que necesitan los vecinos. Todos los días se realiza ahí una olla popular para 250 personas. El gobierno porteño aporta 130 de esas raciones. Lo demás se consigue a fuerza de manguear. El comedor comunitario que Johny ayuda a mantener se llama así: “Padre Mugica”.

Los años de La Morsa.

El inciso “e” del acta de los “Objetivos políticos de la Revolución Argentina”, fechado también el 28 de junio de 1966, era el referido al “ámbito de la política de bienestar social” y decía:

“Crear las condiciones para un creciente bienestar social de la población, desarrollando la seguridad social, elevando al máximo posible los niveles de la salud y facilitando su acceso a una vivienda digna”.

En 1968, el ministerio de Bienestar Social editó un cuadernillo de ochenta páginas que decía en su portada: “Plan de erradicación de las villas de emergencia de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires. Primer programa. Erradicación y alojamiento transitorio”. En la primera línea de introducción, las autoridades reiteraban la coartada ideal que habían encontrado para fundamentar el proyecto:

“En octubre de 1967 el conglomerado urbano, denominado Gran Buenos Aires, fue afectado por inundaciones pocas veces vistas, al desbordarse los ríos Matanza y Reconquista, que cruzan dicha zona en busca del Río de la Plata... Al advertirse que los damnificados en mayor grado eran habitantes de las denominadas ‘Villas de Emergencia’, los cuales en calidad de intrusos tienen allí instaladas sus improvisadas viviendas, en terrenos baldíos privados unas veces y fiscales las más, surgió este ‘Plan para inundados y comienzo de la erradicación de las Villas de Emergencia’”.

El megaplan diseñado por los equipos técnicos del Onganiato -más allá de las excusas y de poder discernir quiénes efectivamente habían sido afectados por las inundaciones- era el más forzado intento de erradicación jamás conocido hasta entonces. Su meta: dar vivienda a 70.000 villeros de la Capital Federal y a otros 210 mil del conurbano. Total: 280.000 erradicaciones y realojamientos. Aquí no se trataba de dar pasos intermedios, ni de mejorar las condiciones de las villas, sino simple y llanamente de erradicarlas mediante un despliegue formidable de recursos humanos, técnicos y financieros.

La alusión sobre la “ciencia y la técnica” del primer mensaje de la Revolución Argentina a la población no era casual: aquellos eran militares amantes de los saberes y destrezas de la tecnificación, buscadores a ultranza de la eficiencia, ingenieros de vastas reestructuraciones estatales. La política hacia las villas no podía si no ser “totalizante, coherente y definitiva”. Esta vez la tarea no fue tanto concebida y ejecutada por

la Comisión Municipal de la Vivienda -como si ocurrió en los años del Proceso- sino por el ministerio de Bienestar Social (al frente del cual se desempeñaba Conrado Bauer), rencabezando múltiples articulaciones. Fue el mismo ministerio que años después creó el Prode o “impuesto al bobo”.

El programa tuvo su ley número, la 17.605, sancionada en diciembre de 1967, que contenía dos programas complementarios. Uno, el de la construcción de 8000 viviendas transitorias en 17 Núcleos Habitacionales Transitorios. En esos núcleos de 13,3 metros cuadrados por familia, se suponía que los villeros debían -otra vez- “readaptarse”, antes de ser trasladados como gente civilizada a sus nuevas viviendas. Expertos sociales serían los encargados de “motivar” a los villeros para dejar atrás sus pésimos códigos de conducta. La idea de que los Núcleos Habitacionales Transitorios (NHT) fueran levemente estrechos -los 13,3 metros cuadrados-, el que fueran de una pésima calidad constructiva y el que se prohibiera expresamente a sus pobladores efectuar en ellos cualquier tipo de mejoras (desde poner un toldo a pintar un marco de ventana, tener coche o perro), respondía a una idea sagaz: al verse obligados a vivir en condiciones tan espantosas, los villeros, como perros de Pavlov bien adiestrados, se verían inundados por ansias de superación y, entonces sí, desearían esforzarse para mejorar, cosa que a ellos nunca se les hubiera ocurrido. Retomaremos este punto más adelante.

Firmes en sus miras, los funcionarios supusieron que veinte de cada cien familias erradicadas se las arreglarían solas para dejar la villa, que a un 60% habría que ayudarlas con subsidios y al otro 20% más vulnerable brindarle aún más facilidades. El 80 por ciento de 76 mil involucraba a 56 mil pobladores. Los funcionarios hicieron este otro cálculo: si conseguían “extraer de las Villas” (tal la expresión literal) y meter a ocho mil personas por año en los NHT de trece metros cuadrados, entonces, mediante simple arte de rotación, es decir llenando y vaciando los NHT en forma anual, en sólo siete años realojarían a los 56 mil. Todos ellos -Fase dos del Plan- irían a viviendas dignas definitivas y eso necesitaba de una fantástica ingeniería financiera. Se asignaron partidas del presupuesto nacional, se consiguieron préstamos del BID, en 1972 se dispuso que un 30% de los dineros del Fondo Nacional de la Vivienda se destinaran al plan de erradicación.

A los villeros no les entusiasmaron particularmente ni los NHT ni las erradicaciones. No tenían demasiadas formas de expresarlo ya que la dictadura de Onganía no tenía en sus planes reconocer a la Federación de Villas como interlocutora de nada. Fue así que comenzó a estrenarse para la historia el uso masivo de las topadoras y las palas mecánicas, que el Proceso supo perfeccionar sofisticando las formas de crear terror. La Revolución Argentina fue también el precedente general de lo que ocurriría años después con el uso de las palabras. Sus funcionarios emplearon dos de los tres verbos básicos que resumirían la política estatal hacia las villas y que la gestión Cacciatore-Del Cioppo desenterró y recicló ni bien puso manos a la obra: *congelar, desalentar, erradicar*.

Congelar implicaba la prohibición de que se generaran nuevos asentamientos, que se construyeran nuevos hogares en las villas o que se reocuparan las casas desalojadas. Esto último era difícil: las casas desalojadas eran inmediatamente destruídas.

Desalentar significaba, entre otras tareas, presionar, urgir, romper la organización interna en los barrios.

Erradicar, en la versión del cuadernillo de las ochenta páginas, implicaba la “eliminación total de las villas”.

Poco más abajo se aclaraba, como previendo: “No se trata de una eliminación arbitraria y violenta. Las soluciones que ofrece el Plan con sus diversas alternativas, lo tornan profundamente racional y humano”. La aclaración, página 8, aparecía bajo el siguiente subtítulo: “Rigor táctico”.

Un poco más adelante, en la página 14 acerca del rubro “Coordinación”, se decía: “La coordinación con algunos organismos no dependientes de Bienestar Social, ha sido prevista expresamente en la Ley, como es la participación del Comando de Ingenieros del Comando en Jefe del Ejército”. El anexo 9 desarrollaba largamente esa participación. Entre otros items, se especificaba que el Comando de Ingenieros sería el encargado de “demoler las villas de emergencia evacuadas y restituir los predios respectivos a quien corresponda” y que tendría entre otras “misiones particulares”, la de “proporcionar apoyo de inteligencia y de acción psicológica a fin de explotar adecuadamente, desde un primer momento, la participación del Ejército en los trabajos a desarrollar”.

Para 1968, año de edición del cuadernillo, los villeros de Capital, según censo del ministerio de Bienestar Social, eran 102.143. Junto con los del Gran Buenos Aires, conformaban una ciudad de medio millón de habitantes.

Todo lo que alcanzó a hacerse en los años del Onganiato en Capital Federal fue la erradicación -implementada por la Comisión Municipal de la Vivienda- de seis villas miseria habitadas por 848 familias. Es decir un total de 3765 personas y no las 52 mil o 70 mil previstas. Los dos programas complementarios de viviendas transitorias a definitivas primero se desfazaron y luego entraron en colapso. Cinco años después del golpe de Estado, ninguna vivienda de las “definitivas” había sido construida. La construcción del primer NHT recién se inició en 1969. De los que llegaron a alzarse, cinco se levantaron sobre terrenos inundables. Para cuando sus primeros moradores descubrieron que en esas viviendas de 13,3 metros cuadrados les correspondían 3,3 metros por persona, ya se había producido el Cordobazo. La Revolución Argentina iniciaba su período de decadencia y los villeros ya estaban en condiciones de pelear y retobarse; comenzaba el proceso de radicalización política. Podría entonces decirse que el magno, hipereficiente operativo erradicador diseñado por aquel gobierno militar fracasó de manera lastimosa. El problema es que algunos de aquellos Núcleos Habitacionales Transitorios hoy siguen conteniendo gente.

Cambio de hábitos.

Como para agravar los efectos del fracaso de la erradicación, las políticas de topadora y NHT terminaron convirtiéndose en un boomerang para las autoridades. Aunque la antigua Federación de Villas había entrado en crisis, reemplazada en alguna medida por nuevas juntas de delegados, la resistencia contra las erradicaciones terminó fomentando un polo de resistencia popular justo para cuando el régimen comenzaba a dar muestras de agotamiento. Estimuló además el acercamiento entre los pobladores de las villas y dos de los focos más combativos de la época: la CGT de los Argentinos y el Movimiento de Curas para el Tercer Mundo. El cambio de época, que incluía esas nuevas formas de resistencia, afectaría profundamente a las propias políticas oficiales en materia de vivienda.

El punto de inflexión quizá pueda simbolizarse en un modesto volante aparecido en 1969, el “Boletín de Villas Nº 1. Qué es la erradicación”:

“El gobierno militar nos engaña diciendo que en estas villas viviremos durante un año para luego ser trasladados a departamentos más cómodos. Pero la realidad nos muestra que los compañeros villeros que fueron trasladados a estas villas transitorias todavía no vieron los cimientos de sus confortables departamentos y sólo ven cómo se les vienen abajo las paredes de las casillas a donde los llevaron”.

Aquel documento contenía una larga descripción de los NHT, desde sus características básicas -2,4 por 2,4 por 2,10 de alto; paredes de cuatro centímetros de grosor-, a su lejanía de los lugares de trabajo, la ausencia de escuelas, más todas las prohibiciones respecto a los modos de vivir. Quienes redactaron aquel boletín fueron bastante más allá:

“(las autoridades) Destruyen la organización de las villas... reemplazan a nuestras comisiones por otras nombradas desde arriba... El verdadero objetivo es alejarnos de a poco de las ciudades y de los lugares de trabajo, con el objeto de desgastarnos y obligarnos a volver a nuestros pagos (nos pagan hasta el viaje para que nos vayamos a morir de hambre a los lugares de donde nos vinimos por falta de trabajo). Esto es parte de su plan de desorganizar a la clase obrera y romper todos sus órganos representativos”.

Más adelante, cuando haya que referirse a la última dictadura militar, se verá hasta qué punto estas observaciones sobre los objetivos estratégicos de la erradicación tenían sentido.

Finalmente, el volante hacía el tradicional llamado a la lucha, en letras mayúsculas:

“Luchemos contra los campos de concentración. Luchemos contra el estado actual de las villas de emergencia. Luchemos por la transformación de nuestras villas en verdaderos barrios obreros”.

La resistencia comenzaba a cobrar fuerza, las pintadas en los barrios aludían no a la sigla técnicamente neutral “NHT” sino a las “villas cuartel”. Un 9 de noviembre de 1969, en Santa Fe, se realizó el primer Encuentro Nacional de dirigentes villeros de todo el país, auspiciado por los curas villeros de Capital y por diversas iglesias. Al poco tiempo, la Iglesia reconoció al Equipo Sacerdotal y Obrero en Villas de la Capital, estrechamente ligado con el movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo. El movimiento ya venía mostrándose en espacios radicalizados. En marzo de 1969, la revista *Cristianismo y Revolución* publicaba una carta de los curas villeros dirigida al presidente Onganía. En uno de sus párrafos, el documento radiografiaba historias de vida:

“Esto pasa hoy en nuestra Patria. CEFERINO GOMEZ, casado, 5 hijos, trabaja con toda su familia en una estancia de Corrientes; sueldo total que recibe la familia: \$5000 mensuales; beneficios sociales, ninguno. Cuando debe llevar a algún familiar al médico del pueblo vecino, se le descuenta su jornal. ELEUTERIO

SOSA, casado, 7 hijos, (2 fallecidos por desnutrición), hachero en La Gallareta (Pcia. de Santa Fe), jornal: \$300 (los días que hay trabajo) pagados en bonos de mercaderías a retirar en el almacén del mismo patrón. EVARISTO CARRIZO, tucumano, casado, padre de cuatro hijos, obrero del surco, después de meses de desocupación por cierre de ingenios y falta de fuentes de trabajo, sufre con desesperación el hambre y la frustración...”.

El texto continuaba con historias semejantes hasta rematar así:

“Estos hombres pertenecen a nuestras villas. Y casos similares se repiten por millares”. Por supuesto, el documento impugnaba la política erradicadora “porque pretende combatir efectos sin atacar las causas”.

Menos de dos años después, ya en los vértigos previos al '73, *Cristianismo y Revolución* daba cuenta en sus páginas finales de comunicados de organizaciones armadas. Desde expropiaciones de camiones que cargaban y su reparto en barriadas pobres a la detonación de “cajas-volanteras” en el ministerio de Bienestar Social “en represalia por el violento desalojo policial de los compañeros de la villa Martín Güemes”, de Retiro.

En aquella época no existía la figura del desaparecido, pero los hubo. Uno de ellos fue Néstor Martins, relacionado según rememora Cymes con el movimiento villero. Es más o menos por entonces que los medios comienzan a usar la expresión “espiral de violencia”, que abarca de manera algo difusa un panorama extenso de torturas, asesinatos, agitación social, represión política, desalojos compulsivos en las villas, y más adelante accionar guerrillero.

Lo que estaba cambiando también, aceleradamente, eran los modos de pensar la sociedad, incluyendo los viejos moldes acerca de quiénes eran los villeros. Cambiaba en amplios sectores de las clases medias la tradicional actitud discriminatoria -los villeros como borrachos, como haraganes, como vividores, como delincuentes- o los comentarios burlones acerca de la proporción de hijos y antenas de TV que tenían las villas.

Hay pequeños símbolos de ese cambio y ese acercamiento entre las clases medias y los sectores populares. Así como en los '60 Bernardo Verbitsky había publicado su *Villa miseria también es América*, en 1971 el Centro Editor de América Latina publicó un librito del antropólogo Hugo Ratier, *Villas y villeros*. Con el estilo propio de la época, lleno de ironías más o menos violentas y de alusiones a la cultura nacional, Ratier ponía en duda el imaginario entero, la concepción establecida acerca de la condición villera, y la contaba de otra manera, poniendo en duda incluso las estadísticas oficiales. Citando un trabajo de la Dirección General de Asistencia a las Villas de Emergencia de la provincia de Buenos Aires, Ratier decía que sólo en Capital y en 1966 los villeros eran 200 mil. Después enumeraba a vuelo de pájaro las diferentes culturas y economías de la que provenían los villeros: los colonos, pobladores y parceleros correntinos y su mala vida en algodones ajenos o propios, pero de dos a diez hectáreas; los riojanos “subalimentados” que alguna vez habían sido mineros o dueños de algunas cabezas de ganado; los zafreros de Tucumán y Salta; los minifundistas de Humahuaca.

Un párrafo de su libro se refería específicamente al papelón hecho por las autoridades con la construcción de los Núcleos Habitacionales Transitorios y al consecuente repliegue oficial. Merece citarse, por previsor.

“Descanse el país: el plan de erradicación transitoria no continuará. Las casas pensadas para siete años durarán cien... La ducha del minúsculo bañito está colocada sobre el inodoro a la turca... No se permite cerrar, ni ampliar, ni mejorar. La gente debía sentir el ‘rigor’ para apreciar luego el paraíso de la vivienda definitiva, para ganar ansias de mejorar. Ahora sí, ya que se ha decidido que vivan allí para siempre, no tiene objeto impedir su mejoramiento”.

La mirada de la prensa seria era otra. En la página editorial de un diario tradicional se decía de los NHT:

“Los ambientes están divididos con sentido moral en relación con el número de miembros de cada familia, la construcción es sumamente modesta, pero de material incombustible”. Aunque atento a la necesidad de dar con las causas profundas que habían engendrado las villas miseria, ese mismo editorial de julio de 1970 remataba con un llamado a los gobernantes para que estuvieran alertas ante “la solapada acción de quienes desean el mantenimiento de las villas ‘miseria’ con fines de agitación popular”.

Uno de los grandes aciertos del Proceso a la hora de conseguir lo que el Onganiato no pudo, fue volver a apelar a las raíces discriminatorias profundas de la sociedad, que los vértigos ideológicos de los '70 no consiguieron borrar en absoluto. De manera tal que, tras los vendavales desatados por el Proceso, en los primeros años democráticos y siempre con esa condición cíclica que tiene la historia de las villas, fue

necesario volver a hacer nuevas sistematizaciones y aprendizajes. En 1987, en *Movimiento villero y Estado (1966-1976)*, Patricia Dábolos, Marcela Jabbaz y Estela Molina volvían a repasar la vieja historia:

“Las villas denotaban una presencia muy fuerte de las contradicciones del sistema en plena Capital, por lo que comenzó a evidenciarse un manejo discursivo tendiente a desviar el nudo del problema villero y desplazarlo a rasgos individuales sobre la cotidianidad de la vida del villero; con expresiones tales como ‘el villero se automargina y de ninguna manera trata de mimetizarse con la sociedad’”.

Sin embargo, las épocas a las que nos estábamos refiriendo, el paso de los '60 a los primeros '70, eran de cambio y los medios -siempre deseosos de captar lo nuevo y potente- comenzaron a prestar atención a ese curita guapo de extracción recoleta y que daba tan bien en cámara, el padre Carlos Mugica, que durante años, junto con otros como el jesuita José Meisegeier, se había dedicado a trabajar por los pobres en silencio y en un lugar tan *extraño* como las villas de Retiro. Esos curas decían que no se podía desvincular el compromiso cristiano del compromiso con los pobres, pedían pan para los que tenían hambre y hambre y sed de justicia para los que tenían pan. El cura Mugica encabezaba protestas y movilizaciones, reclamaba la entrega de los restos del Che Guevara, había andado en París en pleno mayo del '68 y en Cuba, jugaba al fútbol con los villeros de YPF y Saldías -sus feligreses- y organizaba campañas tales como “Navidad con luz”, cosa de que SEGBA se decidiera a echarle unos cables gruesos a las villas de Retiro, y que los villeros pudieran colgarse. Eso fue días después de que Juan Perón, en su retorno al país, se apareciera en la villa para saludar a los vecinos y entrevistarse con el padre Mugica. Esa buena relación, una vez asumido el gobierno, no prosperaría.

Eran tiempos de alegría e integración, de fervor popular y frentes de tormenta. Con el tiempo, el padre Mugica sería visitante asiduo en velatorios: primero fue el de los montoneros muertos en William Morris; poco después, el de los guerrilleros fusilados en Trelew.

Magtara, Johny, Juan.

Aunque Magtara Feres, la del barrio Rivadavia, no vivía en un Núcleo Habitacional Transitorio sino en una casa hecha con créditos del Banco Hipotecario, a ella también le llegó la prohibición imperiosa de efectuar mejoras en su vivienda. Se consideraba altamente peligroso reemplazar el alambre tejido que separaba los terrenitos por una medianera, e incluso cubrirlos con ligustrina o madreSelva. El terreno en el que Magtara todavía vive tiene 9,80 por 10 metros. Hay otros para familias más numerosas de doce por doce y los más chicos son de ocho por ocho. Las casitas que llegaron a construirse fueron 952. Cada casa contaba con un riguroso inventario para que nadie se llevara nada: desde la enorme mesa de portland que invadía el minocomedor y no permitía la circulación (reliquia que unos pocos conservan, sólo que en el patio y para el mate), a las cinco chuchetas de hierro y sus flejes. En caso de pretender introducir camas de madera, los dueños de casa debían efectuar largas colas y no menos extensas imploraciones ante los funcionarios.

Para cuando las topadoras del plan erradicador comenzaron a entrar y salir de los barrios, Magtara ya llevaba un camino recorrido en el suyo. En su interpretación, la historia no tiene nada de complicado: ella venía de sus catecismos, su marido de alfabetizar, en el barrio prevalecía la cultura del fiado. “Eran tiempos en que no se robaba”. En su niñez de Paso de los Libres, su padre, por alfabetizado, guardaba los ahorros de los vecinos en su cuenta bancaria, cada vez que esos vecinos humildes conseguían vender su producción de lana o de lo que fuera. Así que resultaba natural que en el barrio Rivadavia -o villa, según el Proceso- ella hiciera vestiditos para los chicos más pobres en la iglesia o que en su casa hubiera una “cajita solidaria” a la que aportaban los que podían y a la que acudían los que necesitaban, o que ella misma se metiera en la primera comisión vecinal. Esa comisión inauguró la primera plaza del barrio, con su primer mástil. Fue en un lugar despejado, donde supieron crecer los jacarandáes.

Johny Tapia no fue un activista visible en la villa de Retiro durante los años de la Revolución Argentina, dice que acompañaba, en los actos o las movilizaciones. Pese al perfil bajo, tiene un concepto bien preciso de lo que significa el recuerdo del padre Carlos Mugica: “El es una bandera de lucha, prácticamente dio la vida por nuestros derechos y para que fuéramos respetados. Nosotros no podíamos o no podemos conseguir trabajo cuando decimos que vivimos en una villa. La gente de las villas sí que quiere conocer su historia, conocer sus derechos y saber cómo pelear”.

Las cosas se estaban poniendo distintas ya en 1970, cuando Juan Cymes, el tanguero, decidió irse a vivir a la villa Las Antenas. Dice que lo hizo porque siempre fue un militante o barrial o sindical o comunitario, pero que siempre fue el barrio lo que le pareció más concreto y más humano. “Acá me quedo”, dijo que se dijo, y fue a parar a un lote que le dio la gente, a la que conocía largamente, como a todas las villas de La

Matanza, “casa por casa, lote por lote”. Por un tiempo vivió de revendedor, animando una curiosa cooperativa que llevaba y traía muebles, camas, sillas o ropa “para la propia gente del barrio. Los compañeros socializaban hasta su casa y, si lo tenían, su coche”.

Juan Cymes recuerda que cuando comenzaron a radicalizarse los procesos políticos había dos grandes horizontes posibles para un militante: uno superestructural y clandestino, el otro, el territorial, el de promover la transformación en el seno de los movimientos de masas. “No se puede organizar algo y ni siquiera conocer el territorio donde se va a trabajar”, dice Juan. Su reacción no era sólo hacia los clandestinos sino hacia ese fenómeno hartamente conocido, lo que él denomina “toda la podredumbre politiquera, el clientelismo, la profesionalización de la política y el doble discurso que dice que busca *contener* cuando en realidad lo que quiere es *frenar*”.

En 1970 se cumpliría el primer aniversario del Cordobazo. Juan, como tantos, era de los que percibían que en el país algo iba a explotar. Sólo que, además del entusiasmo, dice que ya entonces tuvo una sospecha inquietante: “Esto se está acelerando demasiado”. En Las Antenas, Cymes y sus compañeros crearon una entidad que se llamó SOLBA, Solidaridad y Lucha Barrial. Él comenzó a ligarse con los sindicalistas más duros de Córdoba, con los de SITRAC-SITRAM, con Agustín Tosco, Armando Jaime, también con el abogado Silvio Frondizi, que cuatro años después sería asesinado por la Triple A. Agrupaciones como la de Cymes empezaban a disputar con otras como el Comando de Organización, de Alberto Brito Lima. Pistas de lo que se venía, pero en el territorio semiclandestino de las villas miseria.

Cuarta presentación: el Sobreviviente C.

Alguien, en 1990, escribió un poema forjado al ya flaco calor de esas épocas. Es un alguien cuyo nombre y apellido no se pueden citar, por pedido expreso. Ese alguien, santiagueño, prefiere presentarse como el Sobreviviente C. El Sobreviviente C, del que seguiremos hablando más adelante, guarda una serie de papelitos escritos a máquina en la villa en la que debió refugiarse varios años después de la llegada de la dictadura. Uno de los poemas que escribió empieza así:

El villero advertido, bien orillero
es margen pueblera y palo frontero
flaco de imagen, hijo de labrador o de obrero
es hambre lindero y postergado jornalero.

“De la indioafrolatinoamericanidad”, se llama la composición, que termina de esta forma:

Así trabaja el hambre lindero de jornalero
en pobres de imagen hijos de postergados obreros
lanzas templando en solidario fuego pueblera
p’al advenimiento del hombre nuevo.

El Sobreviviente C recuerda con fiereza qué fue, durante el Onganiato, lo que lo llevó a convertirse en lo que los diarios de entonces denominaban “agitadores”.

-O reaccionabas o te apichonabas o te convertías en autómatas o te ponías loco. Nadie se salvaba, nadie se escapaba de los efectos tiránicos. Te violaban todos los convenios laborales y si te enojabas te tiraban los perros encima.

El Sobreviviente C, como Johnny Tapia y tantísimos pobladores de la 31, todavía recuerda cómo lo hacían trabajar en el puerto: rodeado de alambrados y perros de policía. Lo recuerda bien, y con furia. Todavía a la distancia parece asustarse y odiar la locura que vio crecer en él.

-Yo empecé a expresar ese sometimiento con mi mujer y mis hijos.

El hombre guarda imágenes viejas.

-Venían esos estudiantes con esos discursos... Y algunos decían “¡Bueno! ¡Pasame la ametralladora!”. Había de todo, dependía del portador de las distintas ideas. Algunos predicaban la revolución pero no se dedicaban a construirla.

Dictablanda, primavera e invierno.

Decíamos más arriba que, en su repliegue, el régimen militar, ahora encabezado por el general Alejandro Lanusse y de camino al Gran Acuerdo Nacional, varió en forma sustantiva la política hacia las villas miseria, no sin atravesar múltiples conflictos entre las propias agencias de gobierno, superposiciones de tareas, celos y renunciaciones de funcionarios. Hubo reconocimiento de las organizaciones vecinales, promesas de mejoramiento en los planes de vivienda, compromisos de frenar desalojos y hubo desalojos aislados resonantes como los de la villa Martín Güemes. Hubo desde el ministerio de Bienestar Social, ya encabezado por Francisco Manrique, la conocida combinación de asistencialismo con intentos de cooptación. En las villas de Retiro y del Bajo Belgrano se realizaron mejoras. Al mismo tiempo, entre 1970 y 1973 otras seis villas, en las que vivían más de doce mil personas, fueron erradicadas, con la Comisión Municipal de la Vivienda involucrada en la tarea.

Ya en la etapa final de la retirada del gobierno, la Federación de Villas no sólo había resurgido sino que había ganado en autonomía y sufrido una fuerte transformación en su identidad, forjada tanto en sus luchas como en su relación con el peronismo más duro y con los curules del Tercer Mundo. La Federación ahora se oponía frontalmente a las erradicaciones y proponía en cambio la transformación misma de las villas en barrios obreros.

El Sobreviviente C recuerda un hito del año 1973, la creación del Movimiento Villero Peronista (MVP), alineado con la Juventud Peronista, con la Tendencia Revolucionaria, con el Movimiento de Inquilinos Peronistas. El hombre fue un activista fervoroso en la villa 31, allí donde, apenas un año después de su creación, algunos en el MVP tuvieron la idea de declarar al barrio como “villa montonera”. Apuros terribles de esos años, similares a una anécdota que relata Juan Cymes. La del día en que dos militantes más o menos imberbes y de gestos clandestinos, lo ubicaron de manera secreta para anunciarle que sus superiores tenían pensado volar las antenas de radio Nacional en la villa, que por algo se llamaba “Las Antenas”. Le dijeron que se lo anunciaban por respeto a su trayectoria y para cuidar las vidas y haciendas de los paisanos. Cymes los sacó carpiendo.

Fervores. En el libro ya citado de Dávalos, Jabbar y Molina hay un extenso espacio dedicado a la manera en que se vivió la primavera del '73 en el interior mismo de la Comisión Municipal de la Vivienda. Técnicos, arquitectos, sociólogos, empleados y asistentes sociales decididos a compartir la vida con los villeros. Equipos mixtos, mesas de trabajo comunes, asambleas permanentes, reivindicaciones. Enfrente tenían al lópezreguismo, cómodamente apoltrinado en el ministerio de Bienestar Social. Años extraños: empleados de la CMV y villeros tomaban tierras en forma conjunta, los otros pensaban en erradicar. Magtara Feres recuerda fielmente el julepe que se pegó cuando -como en los relatos de Osvaldo Soriano- en el barrio Rivadavia un grupo de compañeros peronistas peló los fierros para disparar contra otros compañeros peronistas. Ella, que siempre había sido peronista, a partir de entonces se fue deslizándose, suavemente, hacia la democracia cristiana, línea Humanismo y Liberación. Juan Cymes mismo debió escapar de los balazos del Comando de Organización. Las villas eran un botín que todos querían disputar. Entonces, y por momentos, a tiros. Muchos años después, a fuerza de combis, paquetes de comida y teléfonos celulares.

Pasó Cámpora, vino Perón. Eran todavía los años legendarios en los que la gente reía por las alusiones estéticas del General, que refiriéndose a las formas proporcionadas en los frisos de los templos griegos y aplicándolas a la *conducción política y doctrinaria*, usaba la expresión “en su medida y armoniosamente”. “Nuestro deseo es erradicar totalmente las villas de emergencia, especialmente por los chicos, porque son peligrosas”, decía el anciano presidente al diario *La Nación*, en enero de 1974. Así que la muchachada villera, la de la JP, o la de la JTP, conflictuada con López Rega, con Perón y con el jefe comunal (un militar retirado), apenas si podía imaginar consignas: “*En su medida/ y armoniosamente, /queremos verle /la cara al intendente*”. O bien, en alusión al más célebre proverbio ubanístico del lópezreguismo (“El silencio es salud”), la muchachada bramaba: “*A la lata, /al latero, /el silencio no es salud /para nuestros compañeros*”.

El 23 de enero de 1974 el servicio oficial de Prensa y Relaciones Públicas emitió un extenso comunicado, el 134, reseñando una entrevista en la Quinta de Olivos entre Perón -con Isabel a su lado-, López Rega y un grupo de villeros de Retiro. Algunos extractos.

“Los habitantes del barrio expusieron sus problemas y necesidades y el Jefe de Estado les manifestó la

preocupación del Gobierno Nacional para arbitrar soluciones definitivas”

“Hemos tenido algunas dificultades por las malas interpretaciones, por gente que quiere interferir o entorpecer, pero tenemos que dejarnos de macanas con cuestiones políticas. Nuestro deseo no es perjudicar, sino solucionar” (Perón).

“A continuación, y en nombre de la Vicepresidente de la Nación, señora María Estela Martínez de Perón, el señor José López Rega hizo entrega a un delegado de la villa de una orden para retirar en la Dirección de Asistencia Social Integral, 6.000 juguetes para los niños residentes en la Villa 31 de Retiro”.

Entre disputas y juguetes, las cosas sucedían rápido. Johny Tapia recuerda la muerte precisa de un vecino y compañero de la villa 31, Alberto Chejolán. Las otras muertes posteriores, las del Proceso, las tiene al mismo tiempo presentes y perdidas. Luego de que Perón respaldara la política erradicadora (y al mismo tiempo que se batían records históricos en materia de superficie construida en todo el país), comenzó la erradicación de la villa de Saldías. Chejolán fue muerto el 25 de marzo de 1974, en una movilización de dos mil villeros a Plaza de Mayo, frente al ministerio de Bienestar Social. Pronto quedaron rodeados por el tradicional despliegue de patrulleros y carros de asalto. Alberto Chejolán tenía 30 años y recibió un itakazo policial en la espalda. Un ejemplar de esos días de la mítica revista *Así*, con sólo una foto, traza una representación estremecedora de la época. En primer plano, y hacia el ángulo inferior derecho, tres miembros de la guardia de infantería observan al enemigo. Controlan el frente ya deshecho de la manifestación, con militantes que intentan acordonar, contener a los que vienen detrás. Uno de esos militantes sostiene la pancarta en la que la sigla MVP está cruzada por la tacuara y el fusil. Al lado mismo de la pancarta, una mujer joven observa el cadáver, tomándose la cabeza con las manos. Más fotos, comunicados de Perón o Muerte, “el presbítero Carlos Mugica durante el sepelio”, la imagen de otro muerto futuro: el diputado Leonardo Bettanin, un epígrafe que dice “Hermanos y familiares del villero Chejolán lloran sobre su féretro. Eran 14 hermanos”. Ese día los villeros se declararon de luto y de paro. Los volantes del MVP y del Frente Antiimperialista y por el Socialismo (FAS), en donde militaba Juan Cymes, hablaban de traición.

Johny Tapia también recuerda con precisión -y no como las otras, las futuras- una segunda muerte, la del padre Carlos Mugica, baleado el 11 de mayo de 1974 frente a la parroquia de San Francisco Solano. El recuerdo es suscito: “Mucha tristeza, no lo podíamos creer. Había gente de todos lados”.

El Sobreviviente C lo recuerda así:

-El anduvo desde los primeros '60, después vinieron los demás curas tercermundistas. Yo lo quiero mucho, hablo en presente. El era un tipo muy llano, no ocultaba nada. Era deslumbrante, la juventud del barrio se sentía atraída por él. El escuchaba y dejaba hablar. Le gustaba la charla, la polémica, movía ideas.

-¿Fueron años felices en las villas?

-La Argentina venía de una tradición amistosa entre sus habitantes. Los asados, todas esas cosas afianzaban la amistad natural entre los vecinos. Toda esa hospitalidad, esa amistad que traíamos de las provincias... Nos abríamos la heladera... Esas cosas que hoy no existen.

En una serie cronológica sobre la historia de la 31, parte de sus tantísimos trabajos acerca de las villas, el padre José Meisegeier, compañero de Mugica de toda la vida, y además su sucesor, hizo esta sola anotación escueta: “Mayo 12-13. Velatorio en barrio Comunicaciones, Capilla Cristo Obrero, del P. Mugica y posterior entierro. Se suceden las discusiones acerca del autor intelectual de su muerte”.

Al final de ese período, un 40% de los habitantes de la 31 habían sido trasladados a viviendas en monoblock.

“Todas estas acciones -dice Oscar Oszlak en su formidable trabajo *Merecer la ciudad* y en referencia a tomas de tierra, conflictos, erradicaciones y mejoras- no detuvieron, naturalmente, la continuada expansión de las villas, cuyo número y población alcanzaban en vísperas del nuevo golpe de estado, cifras inquietantes”.

El Sobreviviente C, y todos los otros, se fueron preparando para lo peor.

Parte 3.

Banda en fuga y libro azul.

Año 2001, el de la Odisea en el Espacio. Luna esquina Iriarte, en Barracas. La villa 21-24 sigue ahí. Hay galpones y una canchita en frente de la villa, donde está la parada del 70. Pasando Montesquieu, en un

paredón grande, la gente hizo un mural con una leyenda: “Cuidemos el barrio”. No hay un cambio súbito en la fisonomía de los frentes, en Iriarte al 3500, cuando Barracas se hace villa. Es un cambio más sutil, que no necesita de la intervención de muros aisladores. Todo el frente de la villa a lo largo de la avenida es un sucesión de boliches angostos y a lo largo de la vereda coches y camionetas medianamente ruinosas, más un camión atmosférico que extiende sus mangueras de extracción. Entre las paredes de cada boliche desembocan los pasillos estrechos que vienen de los descampados internos. A cada salida de pasillo corresponde una zanja con su arroyo jabonoso y su pequeño puente de madera o cemento. Un perro grande se monta a una perra chica, quedaron abotonados. Ambos miran a todas partes. Los vecinos, a punto de intervenir, discuten con qué estrategia.

Poco más allá está una posible entrada oficial al barrio, la construcción de la mutual Flor de Ceibo. Ese es el centro social y comunitario de la villa. Un par de mesas, algunas sillas, gente que entra y sale, el mate, el termo, las facturas que se ofrecen a la visita. En una lámina grande puesta sobre la pared dice “Plan de pago de tierras”. Hay varias opciones: desde las 24 cuotas de 72 pesos mensuales (más la cuota social) a las cuatro cuotas de 400. O, en su defecto, 1.600 pesos al contado, más la cuota social. Sobre otra pared, un despliegue de fotos que muestra de qué manera los villeros van construyendo sus casas. Lo hacen grupalmente, sin saber cuál casa le corresponderá a cada uno cuando finalicen, para asegurar sudores y esmeros equitativos.

El Flaco Guillermo Villar, alto y pelilargo, antiguo jugador de San Lorenzo y de diversos equipos sudamericanos, es el referente de la mutual. Hace ya una considerable cantidad de años, el Flaco inventó en la villa una propaladora, es decir una radio a megáfono. Esa propaladora después se hizo FM comunitaria, la Sapucay, nudo de articulaciones varias. Alguna vez, allí mismo munido de su micrófono y gracias a la intermediación del periodista televisivo César Mascetti, el Flaco se produjo un notón: recibió en la radio al doctorazo Guillermo Jorge del Cioppo, el principal ejecutor del plan erradicador del Proceso, y lo sometió a riguroso interrogatorio. Dicen que lo hizo polvo. Pero esa FM no está más. Aparentemente, ciertas internas políticas en el barrio, cizañeadas desde afuera, derivaron en cierto triste final.

La visita a la 21 no es sin embargo tanto para dar con el Flaco como para charlar con alguien más veterano, en edad e historia. Ese alguien es un hombre de unos sesenta y pico, alto, muy entero, con una gorra con visera. El tipo estaba en la entrada de la villa hace rato, hubo un mal entendido con los horarios. Está de mal humor.

Sigue como rumiando su bronca, una vez adentro, y aunque comienza la ronda del mate. Parece que el Flaco, siempre sonriente, no le explicó del todo de qué se trata la historia, la de preparar este librito. Antes de testimoniarse nada, dice el tipo, la Comisión Municipal de la Vivienda debería hacerse una autocrítica, y una autocrítica del tipo feroz. Habla duro y se expresa muy bien. Mira duro también, y larga esta frase:

-Yo no sé si les aconsejaría a los compañeros de la villa conceder entrevistas a la Comisión Municipal de la Vivienda.

Vuelve a reiterar lo del pedido de autocrítica. Levanta un dedo y agrega:

-Institucional.

El tipo viene de sufrir un castigo duro, durísimo, que viene de años. Está sentado firme sobre la mesa, y extiende unos brazos enormes y comienza a negarse terminantemente a testimoniarse sobre nada. Mucho menos a presentarse como líder de nada. Aunque tampoco, añade, a minusvalorarse. Tal la literal expresión. El hombre sobre la silla emplea un discurso extraordinario, hecha sobre muchas experiencias y lecturas. Vuelve a aludir a la CMV, al origen de clase de sus funcionarios.

-Me inquieta cómo se conciben ellos como institución.

Es tal cual lo habían dicho otros antes que él, o como lo había resumido Cymes: para más de un sobreviviente de las villas, “La CMV es el enemigo”.

Palabra va, palabra viene. De a poco el hombre afloja, se va enchamigando. Pero no deja de establecer pautas de negociación. Se lo ve bien curtido en la materia. Veremos, dice, si concede la entrevista. Los compañeros tendremos que reunirnos. Acepta finalmente una segunda cita, para dentro de un par de días. Lo hace a regañadientes. Comparte sí la idea de hacer memoria y dice:

-Estamos entrenados para el olvido.

El tipo, por supuesto, es el que dos días después exigirá no ser presentado con su nombre. Es el que firma sus escritos como Sobreviviente C.

El mal argentino.

A partir de mediados de los '60 la población villera del país comenzó a crecer a una tasa descomunal: el 15% anual. Durante años, y lo mismo a partir de la retirada del Proceso, el ritmo de crecimiento de la población villera en Capital estuvo por encima de la del promedio. En su conjunto, hacia 1973 los conglomerados villeros conformaban la cuarta ciudad argentina, aunque medianamente invisible, o al menos no siempre oficializada. Sólo en Capital y el Gran Buenos Aires existían 400 mil villeros repartidos en 600 núcleos poblacionales.

Cuando los militares ocuparon el poder, en marzo de 1976, en la ciudad de Buenos Aires vivían exactamente 224.885 villeros. Esa es al menos la cifra proporcionada por las propias autoridades militares, en la que incluyeron 9100 habitantes de seis Núcleos Habitacionales Transitorios y a otros 6930 que poblaban los barrios Rivadavia, García y Mitre. Como se explicó al relatar la historia de Magtara Feres, esos no eran "villas" -como pretendieron los militares- sino barrios construidos por el Banco Hipotecario.

Sus vecinos ya habían pagado o estaban pagando las respectivas cuotas, desde hacía años. De todas maneras la CMV rebautizó como "Villa 44" al barrio Rivadavia y planificó construir una playa de transferencia de cargas en el agujero que quedara.

Hay buenas razones para creer que en más de un caso el forzamiento de la categoría "villa" obedeció lisa y llanamente a planes erradicadores detrás de los cuales se escondían interesantes negocios inmobiliarios. Un caso particularmente llamativo es el del barrio Coronel García, de Escalada y Roca, "compuesto por integrantes de la Policía Federal", según reconocen los documentos de la CMV de entonces. Sin embargo, desde los escritorios del funcionariado, ese barrio de cien viviendas de material prensado, cruzado por calles y sendas peatonales, también se hizo "villa".

A la hora de estudiar las políticas urbanas del Proceso, el investigador y politólogo Oscar Oszlak es uno de los que más énfasis puso en subrayar la concepción global que tenía el gobierno militar. La concepción "del orden social que aspiraba instituir, del lugar que en el mismo se asignaba a los sectores populares, del papel estratégico que tenía la ocupación del espacio geográfico y de la distribución poblacional juzgada más conveniente a los fines de la 'seguridad nacional'".

El razonamiento sigue así:

"El fenómeno nuevo que se advierte en la política argentina después de 1976 es, precisamente, la subordinación de medidas aparentemente aisladas y puntuales, a grandes lineamientos de política que responden a un modelo de sociedad que poco tiene que ver con la experiencia previa del país".

El Proceso militar retomó una discusión histórica y legítima acerca de uno de los "males" estructurales del país: la de las grandes extensiones "vacías" dentro del territorio argentino, la del despoblamiento versus el sobrepoblamiento, la de la hipertrofia del país con cabeza de león y cola de ratón. Como se sabe, el debate arranca por lo menos con Sarmiento y Arturo Jauretche hizo célebre en su *Manual de zonceras argentinas* la zoncera nº 2 -"El mal que aqueja a la Argentina es la extensión"- y la zoncera nº 3 -"Lo que conviene a Buenos Aires es replegarse sobre sí misma"- . Lo que hizo el Proceso al retomar las riendas de esas discusión, que sigue siendo imperiosa, fue pretender llegar a una resolución por la vía de métodos brutales. Fue más o menos por entonces que comenzaron a manejarse con notorios sesgos de impunidad discursiva nociones tales como la de "viabilidad" -de la Nación, de las provincias- o de los "excedentes poblacionales", o de la cantidad de gente que podía quedar dentro o fuera de un proyecto de Nación según el modelo a elegir.

Desde la Presidencia misma, el gobierno militar requirió a dos mesas de trabajo interministeriales el diseño de estrategias que permitieran tener bajo control "el crecimiento de la región metropolitana bonaerense". Esos planes debían contar con el apoyo de la secretaría de Planeamiento y la coordinación de una denominada Dirección General de Ordenamiento Espacial. La sola denominación técnica de las agencias de gobierno, retrotrae a los planes del Onganiato, sólo que en términos aún más exacerbados. De nuevo, las estrategias a aplicar deberían ser drástica y totalizantes.

En materia de políticas urbanas, y en Capital Federal, los planes de erradicación de villas también eran parte de una estrategia integral, sustentada al menos en cuatro acciones fundamentales. Siguiendo la sistematización hecha en un trabajo coordinado por Hilda Herzer, producido por el Instituto de Investigaciones Gino Germani, esas "cuatro patas" de la estrategia urbanística del '76 son:

-La ley provincial 8912 de ordenamiento territorial, que "tuvo como efecto la no realización de nuevos loteos destinados a la población de bajos ingresos". A la larga, el destino estratégico de buena parte de los

“espacios vacíos” sería el de los *countries*, los barrios cerrados, los cementerios privados. Emprendimientos dirigidos a quienes hoy se denominarían los “ganadores del modelo”.

-La nueva ley de locaciones urbanas que dispuso el descongelamiento de los alquileres en un período de tres años. Como se verá más adelante, muchos de los antiguos inquilinos engrosarían las cifras de expulsión y empobrecimiento.

-El programa de construcción de autopistas, que, junto con los estacionamientos, “favorecieron la apropiación de renta en los terrenos céntricos. Al paso de la demolición, se profundizará el déficit habitacional”.

-La erradicación de las villas.

Vistas estas estrategias en conjunto, la reestructuración urbanística, antes que paliar problemas de infraestructura o resolver el problema histórico del déficit habitacional, desencadenaba fuertes efectos redistributivos, concentradores, y dejaba afuera a buena parte de los sectores populares. Sólo como para hacer una referencia rápida a una de esas “cuatro patas”, que no sea la de las erradicaciones de villas, conviene resumir lo ocurrido con la “liberación” de los alquileres (sólo tres años atrás la palabra liberación se usaba para otra cosa) y sus efectos. Esa otra historia, tanto por el tipo de diagnóstico que hacían las autoridades, como por sus promesas acerca de lo bien que iban a salir las cosas, es esencialmente paralela a lo ocurrido con las villas y sus habitantes.

Los debates acerca de cómo salir de la opción “alquileres libres” contra “alquileres congelados” ya eran crispados antes del '76. Las autoridades militares consideraron tempranamente el problema, al punto que el comunicado n° 13 de la Junta ya lo incluía en la agenda oficial. Para cuando la llegada del golpe, prácticamente no existían alquileres en oferta, ya que los propietarios estaban a la espera de la liberación del sistema. Un departamento de tres ambientes que fuera a salir al mercado tenía un precio de alquiler de unos 20.000 pesos, contra un salario promedio de 36 mil. Las asociaciones de propietarios decían que para salir de los alquileres congelados y para normalizar el mercado, era imperioso derogar todas las legislaciones reguladoras -tal como las autoridades se disponían a hacer en otras áreas- y toda norma de amparo al locatario. El último censo, de 1973, indicaba que existía un déficit habitacional de un millón seiscientos mil viviendas, resultado de la suma entre quienes vivían en departamentos compartidos y los que lo hacían en hogares inhabitables.

Tras una serie de conflictos y cavilaciones, el 29 de junio de 1976 se sancionó un nuevo proyecto de ley que las autoridades elaboraron en casi total hermetismo. La nueva ley, dijeron los gobernantes, marcaba “el principio del fin de una época”. Efectivamente fue así: la oferta de nuevos alquileres se multiplicó casi por siete en apenas un año. Sólo que una gruesa proporción de las familias inquilinas que hasta entonces estaban amparadas, y muchas de las cuales habitaban en las viviendas más antiguas de la ciudad, no podrían acceder ni a esos valores ni a la vivienda que ya ocupaban, una vez que se “normalizaran” los valores. Cuando comenzó a percibirse el drama social que desencadenaría el *sinceramiento* del problema de los alquileres, las autoridades relativizaron las cifras de la cantidad de gente que quedaría afectada, anunciaron planes complementarios, confiaron públicamente en que las reglas del libre mercado diluirían y repararían por sí mismas cualquier dificultad que pudiera sobrevenir, incluyendo la nivelación de los precios.

De manera emblemática, uno de los funcionarios que salió a tranquilizar a la opinión pública fue uno a partir de aquí tendrá un rol protagónico en esta historia: el titular de la Comisión Municipal de la Vivienda, Guillermo del Cioppo. Tranquilos todos, dijo, “el mundo no se va a venir abajo” cuando comience a regir la liberación de alquileres. A mediados de 1978 vaticinó que no habrían más de medio centenar de desalojos en toda la ciudad. Tiempo después se conoció que en sólo uno de los cincuenta juzgados de la Capital, en 1979, se iniciaron 430 juicios de desalojo, que se dictaron 250 sentencias y que 60 de ellas ordenaban el desalojo con uso de la fuerza pública. Paralelamente, los diarios del '78 informaban que el costo de la construcción había aumentado en un 45% (contra un 25% de las previsiones oficiales) y en un 30% los costos de los nuevos alquileres. Los prometidos créditos del Banco Hipotecario, que debían paliar el problema de los quedaban sin techo, resultaron inaccesibles para la mayoría. Los camiones de mudanza y los operativos de desalojo se convirtieron en parte del paisaje y de la vida cotidiana de los sectores más vulnerables de las clases medias bajas y trabajadoras.

¿A dónde fueron a parar esas personas? A superpoblar las casas de sus familiares, al conurbano, a las provincias, a hoteles y pensiones. Forzando una expresión que el sociólogo Artemio López empleó mucho más tarde, puede decirse que esos contingentes humanos fueron antecedente y parte del fenómeno de la

“pobreza de puertas adentro” que se generalizaría en la década del ‘90.

En términos de cifras, Oscar Oszlak deduce un total de 300 mil personas expulsadas de la Capital Federal al cabo de la gestión de políticas urbanas aplicada por la dictadura militar (recordemos que unas doscientas mil fueron las erradicadas de las villas). En las páginas finales de *Merecer la ciudad. Los pobres y el derecho al espacio urbano*, Oszlak hace este balance:

“Cuestionando las formas de apropiación y uso del suelo, (las autoridades) justificaban la erradicación de villas de emergencia. Recuperando zonas destinadas a obras públicas unilateralmente decididas, daban lugar a expropiaciones por construcción de autopistas o por ampliación de espacios verdes. Relocalizando industrias, producían la virtual desaparición de fuentes de trabajo y el inevitable éxodo de la población obrera... Desde la óptica de ciertos sectores sociales y estatales, los pobres de la ciudad siempre constituyeron una amenaza latente. Más de una vez se levantaron los puentes sobre el Riachuelo para evitar el acceso a Buenos Aires de masas obreras que se dirigían en manifestaciones a la Plaza de Mayo”.

Es oportuno ahora explicar por qué Oszlak tituló a su trabajo como lo tituló: “Merecer la ciudad”. Para lo cual es necesario acudir por segunda vez a una declaración de 1980 del jefe de la Comisión Municipal de la Vivienda, Guillermo del Cioppo, acerca de la ciudad de Buenos Aires que el Proceso soñaba:

“No puede vivir cualquiera en ella. Hay que hacer un esfuerzo efectivo para mejorar el habitat, las condiciones de salubridad e higiene. Concretamente: vivir en Buenos Aires no es para cualquiera sino para el que la merezca, para el que acepte las pautas de una vida comunitaria agradable y eficiente. Debemos tener una ciudad mejor para la mejor gente”.

El uso del verbo erradicar.

El 9 de septiembre de 1976 apareció este suelto en el diario *La Razón*:

“3-1627, Bahía Blanca. Este teléfono atiende 24 Hs. del día. Está instalado en el Comando de Operaciones Tácticas del V Cuerpo de Ejército. A toda hora puede llamarse para dar cuenta de movimientos sospechosos. El teléfono fue ubicado en el marco de la lucha antisubversiva con el objeto de *erradicarla*”.

El 17 de diciembre de 1977, cuando un grupo de tareas, contando con el trabajo de inteligencia previa del marino Alfredo Astiz, secuestró a un grupo de integrantes de organismos de derechos humanos, entre ellos a la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, y a las religiosas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, la Dirección Nacional de Prensa hizo reproducir en los diarios este comunicado:

“Frente a la desaparición de un grupo de personas, entre ellas dos religiosas, el gobierno nacional expresa su vivo y categórico repudio a todo intento perturbador de la paz y de la tranquilidad de los argentinos. En estos momentos tan propios para la armonía y el entendimiento, en circunstancias en que pueblo y gobierno buscan, con renovado afán, las soluciones que permitan arribar a una paz digna y duradera, la subversión, encerrada en su nihilismo, insiste con sus métodos de odio y destrucción. El gobierno de las Fuerzas Armadas, con la colaboración de todos los sectores del país, reafirma su inquebrantable decisión de *erradicar* todas las manifestaciones disociantes de la comunidad nacional y rechaza el incalificable propósito de generar enfrentamientos con otros países, con instituciones religiosas y con familias asoladas por la violencia extremista”.

Ambas citas, como es evidente, sólo tienen por objeto ilustrar cuáles eran durante la última dictadura militar los usos del verbo *erradicar*, es decir hasta qué punto *erradicar* era algo más que un simple eufemismo técnico.

De nuevo a las cifras. Es necesario detenerse en ellas, aún cuando siempre el manejo de números que pretenden representar personas tienen algo de brutal e inhumano, y aún cuando, en la historia de las erradicaciones, las estadísticas tienen bastante de elusivas y a veces de contradictorias. A su vez, el hecho mismo de que sean elusivas o contradictorias, tiene relación con la doble lógica en que se desarrollaron las tareas erradicadoras. Las aplicaba el Estado, verticalmente, imponiendo no sólo sus políticas sino sus números. El objeto de aplicación de esas políticas era un mundo social semiclandestino, indefenso, que no tenía cómo terciar a la hora de hacerse visible. Si la represión militar fue clandestina, las políticas erradicadoras, aunque oficiales e incluso vociferadas como estrategia pública central de la dictadura, se dirigían a un sector aislado del conjunto social. Para cuando los efectos de las erradicaciones llegaron a los medios -lo que demoró mucho más que el tratamiento mediático del tema de los desalojados por el descongelamiento de alquileres-, y para cuando la cúpula de la Iglesia se decidió a intervenir, ya la tarea había sido realizada.

Oscar Yujnovsky dice que el total de la población villera hacia abril de 1976 ascendía a 218 mil personas y que el año siguiente ya era de 280 mil, según datos oficiales reflejados por diarios de la época. Aunque las presiones sobre esa población y los desalojos parciales comenzaron apenas meses después de que se produjera el golpe militar, las autoridades se tomaron algún tiempo para afinar sus políticas totalizadoras. En agosto de 1976 hubo esta comunicación oficial:

“La intendencia municipal hace saber a la población que, en cumplimiento de su política de congelamiento de las villas de emergencia existentes en la ciudad, no permitirá de ninguna manera la construcción de nuevas viviendas en dichos lugares o la ampliación de las actuales. Con tal motivo se advierte a quienes no accedan a dicha prohibición, que se dispondrá de inmediato a la demolición de toda nueva construcción sin perjuicio de adoptar las medidas legales que correspondan contra quienes lesionen los legítimos derechos de dominio que ejerce la Municipalidad sobre sus predios”.

Es más interesante la parte final del comunicado divulgado por los diarios:

“La Municipalidad, responsable de la urbanización y el ornato de la ciudad, no puede ni debe tolerar la proliferación de construcciones de emergencia, que por estar reñidas con elementales necesidades materiales y espirituales de la vida humana, son contrarias a la salud de la población”.

El Sobreviente C, Magtara Feres, Johny Tapia, Juan Cymes, junto con sus 200 mil vecinos, eran ejemplos acabados de cómo con su mera existencia conspiraban contra el *buen ornato de la ciudad y la salud de la población*. Veamos de qué manera vivieron ellos los días previos y posteriores al 24 de marzo de 1976 y el peso ominoso de la fórmula *congelar/erradicar*, a la que poco tiempo después se le añadió, justo en el medio, la variante articuladora *desalentar*.

Para Juan Cymes la historia venía de arrastre. Entre otros arrastres, de las persecuciones desatadas por el Comando de Organización y otros núcleos duros de la derecha peronista. Juan se había radicado en 1970 en Las Antenas, aunque relacionado siempre con las otras villas cercanas de Capital. En su villa de adopción lo habían elegido presidente de la comisión vecinal. Cuarenta y ocho horas antes del golpe, fueron los vecinos quienes lo protegieron de la llegada de las patotas mixtas. Lo interesante es quién le dio el primer alerta: un funcionario municipal al que los vecinos de Las Antenas habían tratado durante algún tiempo. Este hombre no sentía por los villeros algún cariño especial, y aunque carente de ideologías radicales, había aprendido a respetar a la gente de la villa y a sus dirigentes sencillamente por lo bien que se organizaban y por los logros que habían obtenido.

Este funcionario simplemente obró por conciencia. Un domingo por la mañana llamó a Cymes para decirle que tenía que comentarle “un asunto delicado” y le pidió verlo con urgencia, no en la intendencia sino en su casa. Una vez juntos, le mostró a Juan un papel que sus superiores le habían pedido firmar. El papel era una denuncia de los *pesados* de La Matanza contra Cymes y otros dirigentes. Lo típico de entonces: reconocidos zurdos, extremistas peligrosos. Cymes y los demás le agradecieron el aviso al oscuro funcionario. Y efectivamente a las pocas horas en Las Antenas cayeron los camiones del Ejército. En la villa los vecinos habían cavado una veintena de pozos debajo de las viviendas. Algunos se ocultaron en ellos. Otros permanecieron borrados durante semanas. En el medio se produjo el golpe. La que al cabo del tiempo no pudo salvarse fue una mujer, Stella Maris Martínez, a la que confundieron con alguna otra persona. Stella Maris era la secretaria de Salud de la comisión vecinal. La torturaron salvajemente. Cuando salió -estaba embarazada-, salió destruida: vivió ocho años encerrada, semipostrada, hasta que falleció. En cuanto a Juan, Las Antenas fue su lugar de exilio. *Guardado* y a la distancia, siguió ejerciendo su rol de dirigente villero, a pedido de los vecinos.

La referencia de Johny Tapia a los días del golpe y a cómo se vivieron en las villas es más breve pero no por eso menos eficaz. A lo largo de su vida en la 31 él debió ir ocupando sucesivamente tres o cuatro casas y lotes distintos, según cómo lo corrieran las circunstancias. “Nosotros esos días vimos cómo nuestros dirigentes, que eran nuestros hermanos, eran perseguidos, y cómo entraban en sus viviendas y las derrumbaban”.

Tapia cita el nombre y apellido del Sobreviente C entre el grupo de los dirigentes perseguidos. El Sobreviente C utiliza su verba fiera cuando tiene que ubicarse en la época: “Era una situación de barbarie militarizada, de maltrato indiscriminado. Me vi obligado a hacer un trabajo de autosugestión para desaparecer del mapa, para no delatar a nadie. Entré en un proceso de olvido voluntario de todo”. El Sobreviente C pretendió guardarse en la 31. Hasta que un día, a la vuelta del trabajo, los vecinos le advirtieron que lo estaban buscando. Durante seis años estuvo a los saltos, viviendo en la semiclandestinidad.

Hasta que pudo instalarse en la villa 21, que es donde vive ahora.

El otro que guarda recuerdos medianamente nítidos de aquellos es días es el padre Pichi, o José Meisegeier, el que había sucedido a Mugica en la villa 31:

-Sabía que la mano venía durísima. Los jesuitas de Belgrano ya me habían dicho: 'No te vengas por acá'. Yo me fui a la villa a protegerme. Porque sabía que, al menos en los años anteriores, más allá de 300 metros hacia adentro de la villa, la cana no entraba. Yo tenía mi plan de escape pensado, por qué pasillo salir, pisando qué durmiente. Los dirigentes qué otra cosa podían hacer que borrarse, irse al interior. El *Negro Vidal Guzmán*, dirigente del Bajo Belgrano, desde entonces, está en el Paraguay.

-¿Y la demás gente?

-Miedo, encerrarse y chau.

Johny Tapia y Juan Cymes coinciden en rescatar el nombre de otro de los dirigentes villeros perseguidos: José Valenzuela, que fue secuestrado y luego liberado. Cómo no, cuando Valenzuela falleció, hace poco tiempo, el Sobreviente C le escribió uno de sus poemas. Sobre una hoja de papel cuadriculado, en tinta y con mayúsculas. *¡Arriba don José Valenzuela!*, se llama el poema, y aquí va una reproducción parcial.

Tenerlo presente con su carcajada de pendejo rabioso

y que si diez se le oponían, mil lo respaldaban

y que si sus rivales en contra farfullaban

su fiel pueblecito indoamericano

de Comunicaciones, igual lo respaldaba

Enérgico y decidido dirigente vecinal, de grandes

movimientos, que temerariamente arremete

contra armados y asesinos ladrones policiales

armado como ariete por su amotinada gente

Tu nombre, junto al del padre Carlos Mugica,

Chejolán y los de nuestros queridos dirigentes desaparecidos,

asesinados, estarán siempre afectivamente

en nuestros corazones, en la popular memoria colectiva.

Lo que es un poco terrible del caso es de qué particular manera operan el recuerdo y la memoria de los muertos y perseguidos de las villas, qué serias dificultades existen para traerlos al presente, o por qué dura razón el Sobreviente C se resiste a decir su nombre y el de otros. De lo cual se intentará decir algo, más adelante.

Las mieles de la mano dura.

A lo largo de estas páginas se señaló hasta qué punto las autoridades militares supieron sacar partido de los peores prejuicios de la sociedad hacia los villeros y cómo, en contrapartida, fueron absolutamente lúcidas a la hora de presentarse como las que, por fin, darían una solución rápida y eficiente al problema. La campaña propagandística se redobló hacia el año 1977 cuando se inició el plan ya sistematizado de erradicaciones. En sus abundantes intervenciones en los medios, las autoridades no dejaban nunca de repasar el repertorio completo de prejuicios: la villa como ghetto oscuro e inquietante, dueña de una subcultura dudosa y nociva; la villa como lugar de acomodos y privilegios; la experiencia histórica acumulada, en la que políticos populistas, demagogos y corruptos no se hacían cargo del problema salvo para dejarlo intacto y lucrar con los villeros, y éstos con los políticos; la cantidad -rigurosamente inflacionada- de extranjeros e indocumentados que quitaban vivienda y trabajo a "los argentinos"; la puesta en tela de juicio de los índices de pobreza real; las actividades comerciales hechas al margen de la ley; el no cumplimiento en el pago de

impuestos pese a lo retributivo de ese comercio; las mafias y los delincuentes reales y presuntos que explotaban el territorio, etc.

Los funcionarios militares se erigían como la contracara absoluta de toda esta panoplia de vicios, quedantismos, negligencias y corruptelas. Ellos, decían, operarían eficientes, limpios, modernos, drásticos. Y así sería la ciudad que legarían a las generaciones futuras. El 13 de julio de 1977 el intendente Osvaldo Cacciatore (cuyo ascenso de brigadier a intendente de Buenos Aires sólo se explica por el reparto de poder entre el Ejército, la Marina y la Aeronáutica), sancionó la ordenanza 33.652. Esa ordenanza fue la que dispuso que la Comisión Municipal de la Vivienda, por ser el “organismo idóneo”, se hiciera responsable del plan integral de erradicación.

Así como durante el Onganiato los planes habían tomado forma impresa en aquel cuadernillo de ochenta páginas, la memoria acerca de cuáles fueron los planes de la dictadura militar del '76 tuvieron letra y música en un grueso libro de 114 páginas impreso por la Comisión Municipal de la Vivienda en septiembre de 1980. Es un mamotreto generoso en cuadros, organigramas y estadísticas, que pasó a la historia como el Libro Azul. En contraposición con el cuadernillo del Onganiato, va al grano sin demasiados prólogos. En el cotejo con todos los documentos oficiales acumulados hasta entonces, los relacionados con la cuestión villera, ostenta un notorio empobrecimiento discursivo. Es posible que ese empobrecimiento obedeciera a una simple cuestión fáctica y de actitud: *No tenemos por qué dar explicaciones.*

En ese Libro Azul, en la tira de nombres de funcionarios de la CMV, se destaca, además de Guillermo del Cioppo, el denominado “Gerente Area Ordenanza 33.652”, comisario inspector Osvaldo Salvador Lotito. El nombre del comisario Lotito hace a hitos importantes en la historia de los villeros, al punto que en homenaje a su trayectoria los sobrevivientes todavía lo recuerdan como *La Chancha Colorada*. Lotito contaba con años de experiencia territorial. Mucho antes del golpe solía liderar operativos de desalojo y era conocido casi como un personaje popular antiguo, un comisario de aquellos que, según recuerda el Sobreviviente C, “se sacaba el uniforme para pelear”. De hecho el Sobreviviente C fue uno de los que enfrentó a Lotito en pugilato, un día que la villa de Retiro terminó gaseada y bien nutrida de guardias de infantería.

Las primeras páginas del libro de la CMV están dedicadas a ilustrar con estadísticas los sucesivos fracasos oficiales en materia de erradicación, incluyendo en forma impiadosa los del período de la Revolución Argentina. Los villeros, decía la primera introducción, más bien económica, eran presentados en trazos muy gruesos como “familias provenientes en su mayoría del interior del país y de países limítrofes, *con escasos recursos económicos* (las cursivas no son del original) y baja calificación de mano de obra, que se encuentran en estado de marginalidad”. Más adelante se aseguraba que “el crecimiento paulatino y desmesurado de las villas de emergencia amenazaba la calidad de vida y de población de la ciudad”. Y un poco después, se afirmaba que los planes acumulados de construcción de viviendas de interés social fracasaron, porque los villeros habían trasladado a sus nuevos hogares “las pautas de la villa”, no se integraron con el conjunto de la sociedad, ni tampoco supieron desarrollar “el sentido de propiedad”. “Como consencuencia -decía la introducción-, no asumieron la obligación del pago de cuotas, ni el cuidado de la vivienda, manteniendo sus normas de comportamiento idénticas a las de la villa”. Como se puede apreciar, los prólogos son breves y asertativos, un tanto feroces, y abren paso a la idea de *ahora viene lo mejor.*

Lo que sigue es un bonito organigrama militar, generoso en círculos, rectángulos y flechas, que por su sola y eficaz simplicidad permite comprender de un plumazo en qué consiste el plan de erradicación y sus etapas. Tres círculos centrales, rayados, dicen lo que ya hemos anticipado: *congelamiento, desaliento, erradicación*. Cuatro circulitos intermedios, más cuatro flechazos, conducen a un círculo mayor, la solución final u “Ordenamiento social y edilicio” de la ciudad. Después de la aproximación geométrica inicial, el Libro Azul se explainaba con el asunto de las tres etapas.

Congelamiento. Tal como se había hecho durante el Onganiato, la tarea consistía en dimensionar el territorio, estudiar su densidad poblacional, censar a sus habitantes, mediante relevamientos aerofotográficos y los que habría que hacer sobre el terreno. Con el tradicional sistema de escritura castrense -1, 1.1, 1.2.4, 1.3.3- y con meticulosidad escolar, la etapa congelamiento incluía tareas como estas:

- 1.2.1. Marcación de casillas. “Se comienza por pintar en el frente de cada vivienda un recuadro de fondo negro sobre el cual se procede a colocar el número correspondiente a la vivienda”.
- 1.2.2. Numeración de casillas. “En forma correlativa se numeran las viviendas a fin de conocer con exactitud la cantidad de las mismas”.

En el punto 1.3.2 se mencionaba el tema de los Certificados de Asentamiento Precario (CAP) en los que

quedarían asentados los datos de filiación de los vecinos, obtenidos en el censo. Los CAP deberían “ser exhibidos por el villero ante cualquier Autoridad Municipal, Policial o Seguridad que así lo requiera”. A su vez (inciso 1.3.3.), la CMV confeccionaría por cada vecino una “Ficha Legajo” que sería “utilizada por el personal afectado a las etapas de desaliento y erradicación. Sirve además para volcar en ella, cronológicamente, el proceso desarrollado por la familia hasta su erradicación”.

Desaliento. “Es aquel accionar que lleve paulatinamente a la población villera a no encontrar motivaciones que justifiquen su permanencia en la villa”. Las previsiones desmotivadoras de la CMV ocupan una carilla y algo más con seis distintas variantes de vigilancia, prohibición y control. Control del comercio “ilegal”, industrias, talleres, depósitos. Clausuras y decomisos. “Prohibición estricta de vender, comprar, ceder o alquilar las viviendas existentes, como así también la ampliación o nuevas construcciones”. Prohibido circular y estacionar “dentro del radio de la Villa”. “Demolición inmediata de casas abandonadas o aquellas en que se constata su venta o alquiler”.

La sexta normativa (o punto “efe”), es particularmente sugerente:

“La presencia constante del Personal del ‘Departamento de Vigilancia Interna’, motivando a la población villera a encontrar la solución a su problema habitacional, mediante la compra de un terreno o retornando a su país o provincia de origen”.

Dos observaciones. Una: en los documentos del Onganiato, donde aquí dice “motivar”, allí decían “urgir”. Dos: de qué neutra manera funcionaba la burocracia del mal.

Finalmente:

Erradicación. “Es el accionar que permite la liberación de los terrenos afectados por las Villas de Emergencia... exige la implementación y concentración de recursos humanos, materiales y económicos, cuya magnitud depende de cada Villa a erradicar”.

Es a partir de aquí en donde las autoridades de la CMV comienzan a hacer previsiones, planes y promesas acerca de a dónde irán a parar los erradicados, a los que se proponen cuatro alternativas básicas.

“a- Traslado a terreno propio.

b- Retorno a su provincia o país de origen.

c- Egreso por medios propios.

d- Apoyos crediticios”.

Respecto del terreno propio, la CMV aseguraba que proveería a las familias erradicadas de transporte para su traslado, de materiales y de un “plano prototipo” siguiendo al cual, fácilmente esa familia construiría su nueva casa. A los que quisieran volverse a su provincia o país de origen, la CMV les garantizaba pasaje gratis y traslado igualmente gratuito de sus enseres. Un poco más ambigua era la explicación acerca del “egreso por medios propios”:

“Son aquellos egresos que surgen como consecuencia del accionar del Organismo en el área de Villas, cuya influencia hace que algunas familias abandonen por sus propios medios estos asentamientos, no utilizando recursos de la CMV”.

En cuanto a los apoyos crediticios, se otorgarían gracias a la concesión de préstamos del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y estarían destinados a familias de bajos recursos. Siendo que, como quedó asentado, desde las primeras páginas de introducción el Libro Azul englobaba al conjunto de la población villera como “de bajos recursos”, no quedaba demasiado claro a quiénes llegarían esos beneficios, especialmente cuando las autoridades comenzaron a decir que eso de los bajos recursos era más que relativo. El margen de duda queda interrumpido a poco que se lee ese párrafo. Punto y aparte y el inmediatamente siguiente es el que dice “Demolición”:

“A medida que van cumpliéndose las distintas alternativas, se procede a la inmediata demolición (esta vez el subrayado si es del original) de las viviendas, lo que culminará con la erradicación total de la familia”.

Vamos a dejar para más adelante los balances que hacía la CMV hacia 1980 acerca de las erradicaciones, y qué fue de la vida de sus previsiones y promesas.

EndFragment:0000220957

Parte 4.

Exodo.

Fue una vecina del barrio Rivadavia la que, agitada, le dio la primera noticia a Magtara Feres, tras la visita de un funcionario:

-¿A vos también te llegó el papel ese? Ay, Magtara. Tengamos cuidado, se viene la erradicación.

-¿Erradicación? ¿Eso qué es?

Es llamativo. La pregunta, la primera reacción de Magtara, fue idéntica a lo que muchos familiares y amigos de desaparecidos recuerdan haber dicho cuando recibieron la noticia del secuestro de un ser querido:

-¿Cómo que desapareció? ¿Cómo alguien puede desaparecer así, en el aire?

Así que, cuando Magtara recibió la noticia de que ella y sus vecinos podían quedarse sin casa, simplemente respondió:

-¡Pero cómo si lo hemos estado pagando toda la vida!

No fue la única en reaccionar de esa manera, fueron varios los que creyeron que lo que decía la vecina “era una locura, un verso”. Hasta que la CMV se instaló en el barrio con oficina y todo, echando a un vecino de su casa. Y hasta que apareció pintado sobre un muro el enorme cartelón de advertencia que todavía hoy se puede leer, prohibido circular, prohibido ingresar con automóviles, prohibido ingresar vehículos de carga, Ordenanza 33.652.

A Magtara le llegó una comunicación de un funcionario del Banco Hipotecario Nacional, recordemos que el barrio había sido financiado con los créditos de esa institución. Y después una segunda notificación, pero esta vez de la CMV. En los archivos del Centro de Estudios Legales y Sociales, hay algunas carpetas viejas con historias villeras de esos años; algunos papeles amarillean. Entre esos papeles hay una copia de una de esas cédulas de notificación que granizaban sobre las villas de a decenas de miles. Esta en particular que sobrevivió en el CELS aparece redactada exactamente de esta forma:

Comisión Municipal de la Vivienda.

Departamento de Vigilancia Interna.

INTIMACION ULTIMO AVISO.

Villa: 1-11-14.

Casa N°: 222.

Sector I.

Se intima al ocupante de la vivienda a presentarse (con tarjeta de censo y documentos de identidad), el día 4 del corriente, en el horario de 14 a 19 horas en la oficina “Erradicación” de la Comisión, instalada en la calle Varela 1950, Capital Federal, de esta villa. De no presentarse en el plazo fijado, su vivienda será demolida.

Buenos Aires, 4 de junio de 1979.

En el borde inferior, donde dice “Jefe de Villa”, aparece la firma de alguien apellidado Kranz. En donde debe firmar el notificado, con su nombre y apellido, aparece escrita con letra rústica la fórmula “Se niega a firmar”. Quien fuera el “ocupante” de la casilla 222 del sector uno de la villa 1-11-14 del Bajo Flores, se negó a darse por notificado. Es presumiblemente uno de los 87 firmantes de un pedido de recurso de amparo presentado por Emilio Mignone, del CELS, que por entonces colaboraba con la villa y con el cura de la villa, Jorge Vernazza.

Magtara fue a la oficina de la CMV con su vecina Anselma. Pese al tono con que había sido citada, le dijo al funcionario:

-Dígame qué precisa.

-Necesito que entregue su casa.

Anselma se puso a llorar.

-¿Cómo me dice?

-Ustedes se van a tener que ir. Tiene que firmar unos papeles y entregar su casa.

-Bueno... ¿Me entrega las llaves?

-¿Las llaves de qué?

-Del departamento nuevo. ¿O se cree que me voy a ir a la calle después de haber pagado tantos años por la casa en la que vivo?

El tipo se levantó de golpe. Levantó el puño y amenazó con descargarlo en la cara.

-Pegue, pegue -dijo Magtara-. Pegue que no soy manca.

Agarró un cenicero pesado que había sobre la mesa y amenazó con usarlo como objeto contundente.

Un cuarto de siglo después, Magtara recuerda y suspira:

-Y pensar que yo en el barrio era la pacifista, la solidaria. Se ve que ese día se me despertó el indio.

Faltaban pocos días para que empezaran las acciones.

-Las familias encerraban a los hijos en los roperos. Después nos empezamos a enterar de que existían los desaparecidos.

Embellecer la ciudad/ Bajo Belgrano.

No les faltó convicción a las autoridades militares a la hora de establecer objetivos estratégicos. Fieles a su concepción de embellecimiento urbano, atentas a la distinta valorización de tierras según de qué zona de la ciudad se tratara y pendientes de la inminencia del Mundial '78, se decidieron a acometer las primeras erradicaciones en las zonas más sensibles de la Capital, las que menos toleraban la presencia de villeros, las de la zona norte. De manera que el primer experimento social y el primer blanco, por su cercanía con la cancha de River, fue la villa del Bajo Belgrano, seguida por el conglomerado de Retiro y el de Colegiales.

Una primera pista de lo que ocurrió con los erradicados de las villas porteñas deriva precisamente de lo ocurrido con esos primeros operativos acelerados por la inminencia del Mundial. Muchos de los desalojados fueron a parar al así llamado complejo habitacional Ejército de Los Andes, cuya construcción data de 1973, y cuyo nombre de guerra -Fuerte Apache- obedecería a un raptó de inspiración del periodista televisivo José de Zer. Fuerte Apache había sido concebido para que vivieran allí unas 22.000 personas. Si en algún momento llegaron a ser 100.000, es en parte por la historia de las erradicaciones. La misma que se continuó en el año 2000 cuando para solucionar el problema habitacional se procedió a demoler algunas de las torres del complejo, solución que también se practicó el 16 de marzo de 1991 con la implosión en cadena de los sucesivos bloques del albergue Warnes, auténtico espectáculo político emitido en vivo y en directo.

La instalación de oficinas de la CMV en su barrio, la que recuerda Magtara Feres en su testimonio, fue parte de una técnica habitual. Esas oficinas llegaron a contar, según de qué barrio se tratara, con una planta de hasta medio centenar de personas que engrosaban otras brigadas como la de la Dirección de Limpieza, nutrida de desocupados, o las dedicadas a la seguridad y vigilancia, compuestas en su mayoría por miembros de la policía o las Fuerzas Armadas, en retiro o en actividad.

En 1980, con espíritu reconfortado, el ánimo en alza, en la página 46 del Libro Azul de la CMV se dice que el operativo Bajo Belgrano, iniciado a fines de 1977, "fue la primera gran experiencia de erradicación" y, por supuesto, una experiencia exitosa. Los funcionarios hacían memoria acerca de lo que era esa villa: once manzanas próximas a "zonas parquizadas, lagos, campo de golf municipal, clubes privados, campo hípico, etc., ...se ubicaba dentro de una zona privilegiada de la Capital Federal". También se detenían notoriamente en lo que sabían sobre las historias y expectativas de los vecinos del Bajo Belgrano, "moradores" que ya en 1971 se habían resistido a ser erradicados "argumentando que se trataba de un barrio obrero y no de una villa de emergencia". "Esas expectativas -continuaba el informe- se mantienen hasta 1976".

A erradicar lo mismo. El 11 de marzo de 1978, exactamente cinco años después del triunfo electoral de

Héctor Cámpora -y seguramente la coincidencia no fue casual- la CMV barrió con las primeras manzanas, demolió 295 viviendas -“20 de ellas de dos pisos”- y erradicó a “298 familias compuestas por 973 personas”. En un tiempo récord de poco más de 60 días, la tarea había terminado, “recuperándose 7,2 hectáreas de tierra valiosísima para un futuro ambicioso plan que llevará a un ordenamiento social y edilicio de la Capital Federal, como corresponde a toda ‘Gran Ciudad’ con envergadura cosmopolita”. Habrá que aclarar: “cosmopolita” no abarca a bolivianos o paraguayos, jujeños o tucumanos.

Al finalizar el capítulo destinado a la villa del Bajo Belgrano, la CMV trazó una memoria suscita cargada casi de melancolía.

“Contaba con una amplia red comercial interna (almacenes de ramos generales, pizzería, bares, panaderías, etc.). Sus habitantes eran totalmente localistas, compraban en negocios de la villa y muchos ‘al fiado’. Asimismo los vecinos que ocupaban viviendas linderas se abastecían en dichos negocios”.

Ahí termina la cosa, sin más referencias acerca de qué se hizo de la historia de ese barrio cuyo nombre está desde entonces en vías de extinción. La pertenencia al Bajo Belgrano, hasta ese año de 1978, había fogoneado entre otras cosas los cantos futboleros de la hinchada de River, especialmente los de 1975, cuando después de 18 años de lucha, aquel equipo que contaba en su mediocampo con Merlo, Jota Jota López y Alonso volvió a obtener un campeonato.

Somos del barrio/ Bajo Belgrano
el que no es chorro/ es criminal
el más cobarde/ mató a su madre
y el más valiente/ pa’ qué vamos a hablar.

Cuide señora/ su gallinero
porque esta noche/ vamo’ a afanar
una gallina/ para el puchero
porque mañana/ tenemo’ que morfar.

Ese cantito, mucho más cercano a la alegría que a la criminalidad, es de lo poco que puede ayudar a reconstruir la historia del Bajo Belgrano en estas páginas. Existe un film documental que trata el tema: Crónicas villeras, de Marcelo Céspedes. Hay una segunda canción, acaso más elaborada que la anterior, que compuso un músico cuya infancia transcurrió, y gozosa, en los márgenes del barrio. Ese músico es un hincha conocido de River y editó en 1983, con el retorno de la democracia, un disco precisamente denominado Bajo Belgrano. El músico es Luis Alberto Spinetta y Jade la banda que tenía por entonces. Las letras de Spinetta no son transparentes, pero hay bastante de lo que pretende decir en la Canción de Bajo Belgrano que se entiende.

La mañana
lanza llamas
desde su herida, débilmente

caleidoscopio de ciudad y vos tan solo, tu ropa está vacía
tan lejos del hogar estás
que todo sueño duele más
y ya no hay forma de recomenzar

Desolado, el hombre perdido
entre camionetas quemadas
en aserrín habrán marcado su mirada
como a una huella
y ésta siempre se diluye
como ojos, barro, cielos, todo...

Bajo Belgrano, amor ascendente,
es ella quien te busca donde vos no estás
y es que toda tu canción persistirá
siempre, siempre, y hasta en el turbio río...

Y si no se entiende demasiado, ahí está la ilustración en la tapa y contratapa del disco, hecha por Eduardo Santellán. La línea lejana de los rascacielos como horizonte turbio, de un lado. Alguien pescando en la costa cochambrosa del río. En una orilla del barrio, la señora barriendo la vereda y el viejo en la silla de paja. Y en el reverso del disco, en el centro, la villa que parece vencerse por su propio peso, como un castillo de naipes. Alrededor el barrio: casas de gente decente, el taller mecánico “El cabezón”, la panadería, el café bar, el colectivo 42, la mina paseando al perro. Un patrullero hace la ronda a la izquierda, con un cana asomando el arma larga. A la derecha, algo demasiado parecido a un Falcon verde, con la sirena improvisada sobre el techo, y en su interior los pesados de anteojos oscuros, asomando también las Itakas. Hay un detalle más: un viejo camión cargado con muebles y colchones. “La nueva fe”, se llama la empresa de mudanzas.

Queda el viejo tango que Juan Cymes debe recordar bien, Bajo Belgrano, de Anselmo Aieta y Francisco García Jiménez. Un tango burrero que decía:

¡Cuánta esperanza la que en vos vive!
-Sacame e'pobre, pingo querido
¡no te me manqués pa'l Nacional!

Barrio Rivadavia. 6 de la mañana.

Como Johny Tapia, como el padre Pichi, como el Sobreviviente C, Magtara recuerda de qué manera los empleados de la CMV motivaban a los vecinos, antes que ofrecerles créditos y terrenos, para que se decidieran a egresar por sus propios medios. Las prohibiciones y controles, los operativos de pinzas y rastrillajes, la imposibilidad hasta de comprar el pan y la leche, la presencia permanente de pesados, la de peros de policía, las requisas al salir y al entrar, los allanamientos, las presiones, las patadas en las puertas, los gritos, los maltratos, las amenazas, las búsquedas de antecedentes policiales, eran factores estimulantes como para tomar la decisión de irse. Magtara, de quien ya se dijo que posee una memoria extraordinaria, recuerda perfectamente el día en que se demolió la primera casa.

-Eran las seis de la mañana, un vecino dio el alerta. Nosotros quisimos avisarnos, nos fuimos a golpear las puertas de los demás... Imposible: eran tanquetas, camiones del Ejército. Mandamos lejos a nuestros hijos para que no los metieran presos. Entonces escuché como un ruido, una estampida. Ahí cayó la primera casa y me puse a llorar. Me acuerdo de eso y me pongo a llorar otra vez.

-Al cabo del tiempo, ¿cuántas casas alcanzaron a demoler?

-Cuatrocientas diez.

-¿Alguna vez intentaron resistir de alguna manera?

-Intentamos. Las mujeres pusieron los cuerpos delante de las topadoras. Pero ellos llegaban siempre de madrugada y tiraban... ¿cómo se llama esto que tiene olor y se ahoga uno?

-Gases lacrimógenos...

-Me acuerdo que nosotros poníamos frazadas, así, y cerrábamos las ventanas porque te ahogaba. Y a la gente que sufría asma o del corazón, la teníamos que llevar hasta la avenida Cobo.

-¿Los gases los tiraron algún día en que se armó más tumulto o...?

-No. Los tiraban siempre a la noche, para que la gente se metiera en las casas. Y ellos decían "Si usted no se va, le tiramos la casa abajo".

Un círculo de pintura negra sobre la casilla, la tarjeta verde de identificación. El padre Pichi, que junto con otros seis curas comenzó a hacer lo que pudo por los villeros de la 31 y por los otros, recuerda qué cosas le franqueaba Guillermo del Cioppo cuando los atendía en su despacho, escoltado por La Chancha Colorada, o comisario Salvador Lotito:

-Miren, yo aplico la radio-pasillo. Hago ruido, golpeo; por ahí alguien tiene que ir preso. Corto el agua y la luz. Y la radio-pasillo hace correr la noticia.

Era un poco más. Lo recuerda el Sobreviviente C:

-Volteaban intercalando, dos casas en una manzana, dos casas en la siguiente. Como para asustar más a la gente.

Johny Tapia:

-Las familias lloraban, gritaban. Eran camiones del Ejército y camiones municipales, día por medio, esos camiones de basura de cabina blanca y caja azul, con volcador. Hasta una señora con cáncer, me acuerdo de ella, que estaba con el hijo. Pedían por favor que no los llevaran. Los cargaron igual. Eran miles familias, los de Saldías, que muchos hoy están en Fuerte Apache, los de YPF, que los mandaron a Lugano, los de Comunicaciones, Inmigrantes...

Ya para 1980, con buena parte de la tarea consumada, en una de sus abundantes intervenciones públicas, Del Cioppo resumió estas historias en forma breve:

-Se trató el problema en forma quirúrgica y en tiempo récord .

Fórmula expresiva que al día de hoy goza de excelente salud e incluso aspira votos.

-Siempre que se opera hay sangre-, complementó al otro día el comisario Lotito.

Magtara, un año después.

Dice Magtara, textualmente: “Duró como un año el tiempo de las demoliciones”. Vamos a dejar aquí que fluya otra porción de su relato, con la historia del barrio Rivadavia.

-Recurrimos buscando ayuda a tantas partes... todos te cerraban las puertas. Nos decíamos: “¿Y si nos reunimos en las iglesias?”. “Nooooo.... porque nos van a incendiar las iglesias”. Todo el mundo nos negó la ayuda. Eramos un grupo como de treinta personas. Un día nos dijo Del Cioppo a nosotros: “¿Ustedes qué se creen, que van a poder con nosotros? Ahí viven 3000 personas y ustedes son 30. Los demás salen fácil”.

Hasta que poco a poco el barrio, y con él las viviendas, comenzó inundarse por la cantidad de cañerías maestras rotas que las topadoras dejaban a su paso. Ella se despertó una noche y vio que el agua estaba tocando su colchón. Quizá lo más precioso que le quedó arruinado desde entonces fue lo que tenía guardado en una valija.

-Toda una valija que tenía llena de fotos, que sacábamos fotos cuando tiraban las casas. Y yo tenía mucho escrito. Escribía por ejemplo cuando se iban a dormir los chicos, que qué sería de la vida de nosotros, que a dónde íbamos a ir a parar, que tantos vecinos que desaparecieron no los íbamos a ver más, los rajaban por la madrugada, los tiraban por ahí.

Uno de sus escritos se llamaba “La noche oscura de la Patria”.

-¿Cómo fue que usted y otras familias del barrio consiguieron quedarse?

-Por la resistencia que hicimos, porque éramos treinta pero éramos de fierro. Pensábamos resistir aunque nos costara la vida, ellos vieron que éramos muy fuertes. Un día me dijeron “No pasa nada, con ustedes no es la cosa”. Ellos, cuando golpeaban así fuerte y uno abría, ponían el pie en la puerta, para que no pudiéramos cerrar, ¿viste? Entonces se metían adentro.

A ella también le golpearon la puerta unas cuantas veces. Un día le dijeron “Venimos a llevar las máquinas”, las de su taller de costura.

-¿Cómo que se llevan las máquinas?. Acá no van a llevar ninguna máquina porque nosotros las compramos peso a peso con el sudor de la frente.

En este punto el relato se embarulla levemente. Magtara dice que entre los que le golpearon la puerta había un comisario pelirrojo al que le decían el Colorado, pero aparentemente un Colorado que no era La Chancha Colorada, o tal vez sí. La cuestión es que este Colorado, que era el jefe del operativo, tenía un hijo al que por supuesto los vecinos llamaban el Coloradito. Y parece que este Coloradito, “que era tan matón como su padre”, adoptó su peor cara de hijo de puta:

-¿Así que no la vamos a llevar a la máquina?

El Coloradito amagó con agarrar una de las máquinas más grandes. Magtara reaccionó como aquella otra vez:

-Mirá, vos la vas a llevar a la máquina. Pero vas a morir acá dentro.

Y agarró unas tijeras grandes de costura.

Ahora, de nuevo desde el presente, un cuarto de siglo después, Magtara se repite en esa extrañeza de no poder reconocerse:

-Y yo le iba a clavar... Te juro que... Qué feo que es perder el control, viste. Yo que era tan, qué sé yo. La buena vecina, que tomábamos mate, que plantábamos plantitas, de pronto te convertían en una bestia. Y mi nuera, cuando vio que le iba a clavar la tijera, largó la máquina. Y dijo el Coloradito "Bueno, está bien. La dejamos".

Si Magtara pudo sobrevivir en su casita del barrio Rivadavia no fue sólo por su firmeza. Gracias a su militancia cristiana había hecho buenas migas con un miembro destacado de la Acción Católica, prohombre de la ciudad, el presidente de la Asociación Amigos de Avenida de Mayo. Este hombre, que cultivaba alguna amistad con Cacciatore o Del Cioppo, solía insistirle:

-Magtara, allá no va a quedar nadie. Es mejor que te trates de salvar vos. ¿Qué querés hacer? ¿Quedarte en la calle con toda tu familia?

Recuerda Magtara que respondía:

-Pero, ¿y la demás gente?

El hombre intercedió. Consiguió hacerle una cita con Cacciatore. Cacciatore hizo saludo uno y los dejó con Del Cioppo. Del Cioppo le propuso un arreglo, cura de por medio, ofreciéndole una casita en el barrio Dellepiane. Pero Magtara, de nuevo, terca:

-¿Y la demás gente?

-¡Pero señora! ¡Usted pide la chancha, los 20 y la máquina de hacer chanchitos!

La segunda oferta fue más amplia: treinta viviendas en Claypole, para todos los vecinos resistentes. Pero los vecinos no querían, "por la lejanía del trabajo y de la escuela de los chicos".

Cuando vio que los vecinos no aceptaban la oferta, Del Cioppo se decidió a apretar:

-Bueno, entonces pierden todo.

-¡Magtara! ¡Te vas a quedar en la calle!-, suplicó su amigo el mediador.

-Y bueno, vamos a ver si nos quedamos en la calle.

Ella cree que si Del Cioppo no los echó a patadas, fue por la buena presencia del amigo mediador.

Todos nuestros muertos.

Verano del año 2001, en la mutual Flor de Ceibo, de la villa 21 de Barracas. Es el día de la segunda cita con el Sobreviente C. Siempre tieso sobre la silla, la mirada dura, tira esta frase como para que quede claro:

-Pelée por todos lados, me cagaron a tiros por todos lados.

Con pinzas, forceps y tirabuzón, apenas si se le pueden arrancar unos pocos datos de su biografía más lejana. Dice que nació en Santiago del Estero, que ya en Santiago vivía en una villa, que su padre era de origen africano y su madre era chilena. El, en 1955, cuando se vino a Buenos Aires, fue a parar directo a la villa 31 de Retiro.

El Sobreviente C ya pasó sus escritos al entrevistador. Afloja, siempre con esfuerzo, unos cuantos recuerdos e ideas de lo ocurrido en tiempos del Onganiato, los del '73 y los del Proceso. Quizá sólo sea la forma que sus palabras adoptan en los apuntes, pero en el cuaderno los párrafos se aparecen siempre torvos, jodidos, como si comprimieran un nivel de fiereza y de dolor insoportables. Hay dos compañeros de la villa que lo escuchan hablar y se mantienen en silencio. Y alguno que otro que de vez en cuando se apoya en el umbral de la puerta, para escuchar también en silencio. Hay algún tipo de comunión entre ellos; y códigos que el entrevistador no está seguro de poder descifrar. Muy de vez en cuando uno de los muchachos que lo escuchan, interviene. Lo hace por ejemplo cuando el Sobreviente C recuerda la represión caída sobre el puerto o sobre las villas de Retiro. Ambos se conocen de las épocas del puerto tanto como de las de la 31. El compañero que lo escucha hablar, de pie y apoyado contra una pared, recuerda de pronto a un vecino suyo al que metieron en el camión y llevaron hasta Lugano y cómo a la semana otro camión lo tiró en la villa 1-11-14.

En un momento dado el Sobreviente C menciona los reencuentros habidos después de la dictadura. "Felices de vernos vivos -dice- después de tantos años". Como tantos que debieron esconderse o irse del país, también entre los villeros existía la duda de qué le habría pasado a Fulano y qué a Mengano, si les habría pasado o no lo peor.

-Ahí ocurría que teníamos que preservar la vida de los compañeros, no podíamos vernos. Yo tenía que preservar la mía y viceversa. Ellos también pensaban que yo podía ser boleta.

A lo largo de la conversación, el Sobreviente C no sólo se resiste a dar su nombre sino también a intentar reconstruir la lista de los que se rajaron y de los que murieron. Comprime sin mayor detalle siete muertes. Pero no dice de quiénes ni cómo. Muy al final, queriendo y no queriendo, hablando entre ellos y sin mirar al entrevistador, se pasa revista a otras muertes. El compañero que lo escucha cuenta de otra víctima anónima y la tira como ametrallando, apretando los dientes, dándole importancia y al mismo tiempo, si es por el tono presunto, vaciado de sentimiento. Es el recuerdo de alguna madrugada del '76, en villa 31. La policía estaba allí, como siempre, en operativo de rutina o lo que fuera, con la gente alrededor. La única imagen que suelta el compañero del Sobreviente es la de un muchacho joven de la villa, activista, que se negó a obedecer vaya a saber qué orden de los uniformados.

-El se agarró a la manija de la puerta del patrullero. Sabía que lo iban a matar. Cuando se separó un par de metros, lo acribillaron.

Así que otra muerte, y gratuita. Habrá que pensar que si en el país del Proceso se mataba clandestina e

impunemente por las calles, tanto o más podía ocurrir en las villas, cuya visibilidad social siempre fue menor. ¿A quién le podía importar? De hecho las barriadas pobres siguen siendo los territorios en los que se sigue matando con ademanes no demasiado clandestinos. Lo complicado del caso -tal como se insinuó algunas páginas más atrás- es que la historia de las villas durante la dictadura, en lo que concierne a los nombres de sus perseguidos y desaparecidos, ha quedado lejos del mundanal ruido de la Argentina blanca, por su propia constitución histórica y social. Cuando se intenta hacer esa sistematización de las víctimas y los nombres, la información que se recibe es fragmentaria o se ha perdido para siempre. Y las actitudes son recelosas, como la del Sobreviente C.

Las clases medias, mal que pudieron, han reconstruido la historia de sus muertos. Los villeros, y seguramente lo mismo ocurre con otros sectores populares, especialmente en el Gran Buenos Aires y el interior del país, han quedado más o menos colgados de la palmera, con sus dolores y terrores internalizados, castigados desde antes del '76 y después del '83 también. Dice Juan Cymes: "Los organismos de derechos humanos nunca pudieron hacerse cargo de las desapariciones de las villas, aún cuando alguna vez los villeros funcionamos en la APDH y aunque, desde el CELS, Emilio Mignone, Alicia Oliveira y Augusto Conte nos dieron una mano con los juicios por las erradicaciones".

Sería injusto llamarle temor a lo que siente el Sobreviente para no querer hablar, porque seguramente el hombre no tiene nada de pusilánime. Estas líneas fracasan allí donde había que ponerle un nombre a su reticencia, y a la de los demás.

Comida para ratas.

Con su apellido alemán y su formación de jesuita, también José Meisegeier, el padre Pichi, evoca recuerdos de cadáveres amanecidos sin explicación aparente. Un día, ya avanzada la erradicación de la 31, un vecino de Saldías se apareció para decirle:

-Padre, tiraron unos cuerpos ahí en el barrio nuestro. Nos dijeron que no los miráramos, que no los tocáramos porque si no nos iba a pasar como a ellos.

Eran nuevos cadáveres tirados sobre la pampa argentina, cuerpos NN como los que aparecían en la costa del río, Fátima o Pilar ("Aparecieron esta mañana numerosos cadáveres", tituló el 3 de julio de 1976 La Razón). El padre Pichi interpreta que seguramente fueron cadáveres tirados a modo de presión psicológica sobre los villeros. Recuérdese: "el accionar que lleve paulatinamente a la población a no encontrar motivaciones que justifiquen su permanencia". Los cuerpos quedaron ahí, para ser comidos por las ratas. Después las motoniveladoras pasaron por encima de sus restos.

Así que las autoridades se anotaron grandes porotos a la hora de conseguir uno de los objetivos centrales de la etapa congelar-desalentar, previas a erradicar. Johny Tapia lo sintetiza de esta forma:

-Miedo. Teníamos miedo a ser secuestrados al salir de las iglesias, tras las reuniones que hacíamos, miedo a salir del barrio y que te cazaran por 'activista' o 'extremista', miedo a desaparecer.

Magtara Feres, que ahora, en el 2001, cuenta su historia en una pequeña oficina de la CMV, retoma este mismo asunto. Johny Tapia está a su lado y la escucha con atención, aportando de vez en cuando un murmullo o un dato nuevo sobre La Chancha Colorada.

Lo que cuenta Magtara sucedió un domingo lloviznoso en la iglesia del barrio. Sus vecinas había ido como

siempre a la capilla de chapa, la que tenía a la virgen de Itatí, cosa de limpiarla y preparar las flores para la misa que debía officiar el padre Orlando Yorio. Ella no fue ese día, por culpa de una gripe. Yorio, amigo y viejo compañero de andanzas del padre Pichi, llevaba años viviendo en una casita del barrio.

-Viene una vecina corriendo y me dice “Ay, doña Magtara. Le llevaron al padre Orlando y a todos los chicos, y a la monja también”. Todos ellos siempre venían a tomar mate, caminaban por el barrio, eran como unos vecinos más. Entonces decían que el padre era comunista, le inventaban cada historia, terrorista, de todo. Entonces le digo a la vecina “¿Cómo que se lo llevaron?”. “Sí, vinieron con esos camiones grandes del Ejército y lo encapucharon cuando estaba dando la misa, los alzaron ahí a la fuerza, a todos los chicos, diecisiete chicos”.

La noche anterior Magtara había recibido una visita inquietante. Supo después que los visitantes cayeron en un coche negro y que uno de los pasajeros bajó para preguntar por el padre Orlando Yorio. “Somos amigos de él, tenga confianza, venimos para salvarlo”, le dijeron a Magtara cuando dieron con ella. Ella negó que el padre viviera en la villa. El hombre que bajó del auto negro, que tenía pinta de ser importante, le insistió y le pidió que lo llevara hasta la casa. Ella siguiendo dudando, con temor. Finalmente se subió al coche, quedó sentada atrás entre dos grandotes, sintió los bultos de sus armas.

-¿No me reconoce?-, preguntó el que parecía estar al mando.

-Me parece que sí, de algún lado.

-Me habrá visto por televisión.

El hombre se presentó como alguien que había sido importante en el peronismo, alguien que había viajado en el avión que trajo de regreso a Perón. Llegaron a la casa del padre Orlando. Pero el que abrió la puerta no fue el padre Orlando sino un pelado desconocido. Magtara tardó en reconocerlo, aparentemente era otro cura conocido en el barrio como El Alemán, y que hasta hacía poco era barbudo y pelilargo. El hombre del coche negro estaba ahí para urgir a los dos curas para que se fueran de la villa. El Alemán aceptó el consejo: “Yo me voy esta noche”. El padre Orlando dijo que no, que se quedaba. Le insistieron, pero nada. Se dieron unos cuantos abrazos.

Magtara retoma el relato:

-Vinieron esa noche. El se había ido a la casa de la madre o de un familiar, le rompieron todos los libros. El tenía una biblioteca grande hecha de ladrillos y maderas, como la cama. Era un alma de Dios, se conocía a todo el barrio. Yo le preguntaba qué quería decir lo de “cura terciarista” y él me decía “No te explico porque vas a tener miedo, vas a creer que somos unos monstruos”. Pero como yo veía que era tan bueno...

Magtara maneja más o menos al bulto la idea de que ese domingo en que secuestraron al padre Orlando, desaparecieron también “diecisiete chicos” que hacían catequesis y trabajo social en el barrio. Y que de todo el grupo sólo se salvó una sobrina de Francisco Manrique y otra chica que era hija de brigadier o de coronel.

-¿Por qué está segura de que eran diecisiete?

-Y, porque más o menos los chicos que siempre venían eran entre quince y diecisiete. Esa chica que se salvó estuvo nueve años en España. Yo no quiero mencionarla porque las tías viven, y ellas me pidieron

que nunca cuente porque tenían mucho miedo. La chica, cuando vino, ocho o nueve años después, parecía otra persona. Se ataba un pañuelo así, no se dejaba ver la cara. Había sido una chica brillante, de la facultad... Cuando la vi en ese estado... Ella nunca supo que le mataron a todos los demás.

El padre Orlando Yorio estuvo cinco meses secuestrado, sin que los vecinos del barrio supieran absolutamente nada acerca de cuál había sido su destino.

-Nosotros ya dábamos misa por él, creyendo que estaba muerto. Y una noche viene alguien. Me vino a buscar una persona desconocida, golpea la puerta, me dice "Necesito que venga conmigo". Era una noche oscura, una boca de lobo, no había quedado ni una luz porque ellos habían destrozado todos los faroles, todas las cosas. Mi hijo me decía "No, mamá, no vayas. Quién sabe quién es el que te quiere ver, a lo mejor te lleva a matar".

La mujer insistió en que Magtara se pondría feliz de reencontrarse con una persona que conocía bien y que quería mucho. Magtara fue hasta el lugar en el que la estaban esperando, una casa que ya había sido desalojada, pero no demolida.

-Entro ahí y veo que había una mesita y había dos hombres y una mujer. Yo, cuando entré y los vi, les dije: "Acá no hay ninguna persona amiga mía". Y me asusté porque me dije "Acá me van a matar". Entonces el padre Orlando hizo así y se sacó la peluca. Estaba vestido de mujer, me dijo: "Magtara, no me quería ir sin despedirme de usted, que tanto luchamos juntos". El Papa lo salvó a él, lo mandaba que lo lleven a Roma. Y cuando se sacó esa peluca rubia que tenía nos abrazamos tanto, lloramos tanto. "¡Orlando estás vivo, estás vivo, no lo puedo creer!".

-¿Llegó a decirle en dónde lo tuvieron secuestrado?

-Ay, nos contó tanta monstruosidad. Yo no lo podía creer. Nos mostró las piernas, cómo las tenía. Eran llagas... los brazos. Dice que era como un pozo y ellos tuvieron no sé cuántos días en ese pozo, que dice que se orinaban y que hacían sus necesidades encima.

La historia del secuestro y desaparición del padre Orlando Yorio aparece relatada en el Nunca Más en forma un poco más ordenada, aunque en lo esencial es como la cuenta Magtara. Yorio, sacerdote jesuita, fue secuestrado el 23 de mayo de 1976 en el barrio Rivadavia. Ese mismo día el general Albano Harguindeguy atribuía el secuestro del ex-senador uruguayo Zelmar Michelini, "ese luctuoso suceso", a la subversión. La tapa del Clarín de ese día mostraba el ensangrentado rostro de Víctor Galíndez tras una pelea en Sudáfrica y anunciaba el asesinato de Ringo Bonavena en Estados Unidos. Gracias a presiones de la Iglesia, Yorio fue liberado el 23 de octubre de ese mismo año. Otro sacerdote, su compañero Francisco Jalics, había sido secuestrado con él. Ambos compartieron el cautiverio en la Escuela de Mecánica de la Armada. Al tiempo fueron llevados a una casa operativa de Don Torcuato. En el legajo 6328 de la CONADEP, Yorio testimoniaba de esta manera:

"En determinado momento del interrogatorio se pusieron a discutir entre ellos, pude escuchar que comentaban la conveniencia o no de una rastrilleo en la villa... Sentía que estaba en un sótano, permaneciendo en el suelo, siempre con la capucha... Otro día vino un hombre, era el mismo que me había preguntado por Mónica Quinteiro... Nos preguntó si no nos habíamos dado cuenta de quién nos había tomado, y el padre Jalics le contestó 'La Escuela de Mecánica de la Armada', y el interrogador asintió diciendo 'Sepan que esto es una guerra y en una guerra a veces pagan justos por pecadores'".

Pasaron los cinco meses. Previa inyección de pentonaval, Yorio y Jalics fueron subidos a una camioneta

que comenzó a dar vueltas por la ciudad. Otra inyección y más vueltas. Terminaron arrojándolos en un descampado, en unos bañados de Cañuelas.

Para aclarar a qué se refiere Magtara al aludir al secuestro del padre Yorio y de “diecisiete chicos” y para relacionarlo con el nombre de Mónica Quintero, mencionado por el torturador de la ESMA, es necesario retrotraerse a una carta famosa que Emilio Mignone, uno de los fundadores del CELS, le escribió al entonces teniente general Jorge Rafael Videla. La carta fue escrita el 25 de mayo de 1976, es decir dos días después de la desaparición de Yorio y Jalics. Comienza describiendo el allanamiento de su casa a cargo de un grupo de tareas del Ejército, ocurrida un viernes 14 de mayo a las cinco de la madrugada. Continúa relatando la detención de su hija Mónica Mignone. Finaliza diciendo “Desde esa fecha hasta hoy -o sea durante cinco días-, no he podido saber nada de Mónica. Es como si se la hubiera tragado la tierra. Nadie se hace responsable de su detención ni nos da a conocer dónde se encuentra”.

Mucho después el matrimonio de Emilio y Chela Migone interpuso un escrito ante la Corte Suprema, muy posterior al primer recurso de habeas corpus que ya habían presentado. Había pasado tiempo y el escrito era rico en detalles. Explicaba las insólitas circunstancias en que se había producido el secuestro: en un edificio de la avenida Santa Fe, lindero con otro edificio fuertemente custodiado por el Ejército, ya que allí residía la familia del general Ramon Genaro Díaz Bessone. Ubicado a media cuadra del departamento del almirante Isaac Rojas, vigilado también día y noche por los soldados.

“Ese mismo viernes -continúa el escrito- supimos que en operativos similares, unas horas antes, habían sido detenidos cuatro amigos de mi hija”. Los Mignone citan los nombres de dos matrimonios también secuestrados por el Ejército: el de María Vásques Ocampo y César Amadeo Lugones y el de Beatriz Carbonell y Horacio Pérez Weiss. Agrega que poco más tarde se enteraron de la desaparición de Mónica Quintero y de María Esther Lorusso. Mónica Quintero era una ex-religiosa de las hermanas de la Misericordia, había sido profesora de Mónica Mignone en un colegio de Belgrano.

Más adelante los Mignone reconstruían otra historia más, a la que consideraban “elemento probatorio importante” para la causa que intentaban esclarecer:

“El domingo 23 de mayo de 1976, alrededor de 50 hombres con uniforme de combate de la Infantería de Marina, algunos de ellos con el aditamento de boinas rojas, rodearon una zona de la villa de emergencia del Bajo Flores, en las proximidades de Curapaligüe y Cobo, a la vista de los vecinos. Eran exactamente las 12. Allanaron una modesta vivienda donde residían hacía varios años los sacerdotes jesuitas Francisco Jalics, conocido autor de varios libros dedicados a la práctica de la oración y Orlando Yorio, consagrado a la pastoral en ese medio. En ese momento se encontraba oficiando misa el presbítero Gabriel Bossini y participaba un grupo de ocho jóvenes que se desempeñaban como catequistas... La Infantería de Marina se llevó detenidos a todos los presentes, excepto el presbítero Bossini. Siete de los jóvenes fueron liberados en la madrugada siguiente en la avenida General Paz”.

La alusión de Magtara acerca de los secuestros y de la intervención de Francisco Manrique -ex marino- y de otro militar -ex capitán de Navío- es veraz. Los secuestrados y los ex-marinos pudieron establecer que el lugar de detención fue la ESMA, en donde quedaron Yorio y Jalics. Pero el grupo de jóvenes que hasta hoy siguen desaparecidos no es el de los que se llevaron junto a Yorio y Jalics, sino el de los que fueron detenidos el 14 de mayo anterior. Entre ambos grupos suman quince personas. Ninguno de ellos eran militantes políticos sino jóvenes católicos comprometidos. Todos pasaron por la ESMA. Otro sacerdote, el padre franciscano Carlos Armando Bustos, fue desaparecido también en ese mes de mayo, un día 8, frente a la iglesia de Pompeya. Formaba parte de la corriente Cristianos para la Liberación.

Este espacio dedicado a los padres Yorio y Jalics, a los jóvenes catequistas del Barrio Rivadavia y a los

cristianos comprometidos, obedece al hecho de que todos ellos trabajaron en las villas. Amén de los asesinatos de los obispos de La Rioja, Enrique Angelelli, y de San Nicolás, Carlos Ponce de León, abarcando únicamente a la grey católica, al cabo de la dictadura se supo que 16 sacerdotes comprometidos con los pobres fueron asesinados, que once fueron detenidos y expulsados del país y que a otros 22 se les permitió quedarse tras su secuestro y tormento. Hay nombres resonantes entre los de los desaparecidos relacionados con las villas. El de la hermana Alice Domon, que trabajó en Lugano, el de Dagmar Hagelin, que lo hizo en Fuerte Apache, el de Marianne Erice, que militó tanto en la villa del Bajo Belgrano como en el barrio Güemes, de la 31.

El padre Francisco Jalics, una vez liberado, viajó a los Estados Unidos, más adelante se radicó en Alemania. Yorio se refugió en Roma y, de regreso al país, estuvo en el obispado de Quilmes, junto al obispo Novak, y en Ingeniero Jacobacci, con Miguel Hesayne. Falleció en el Uruguay el 8 de agosto del año 2000, a los 68 años.

Todos nuestros muertos (II).

En una nota de la revista El Porteño hecha en la villa de Retiro, publicada en marzo de 1986, aparecía -sin que el cronista supiera entonces de quién se trataba-, un personaje conocido y respetado por los dirigentes villeros: Efraim Medina Arispe. Puede que hacia 1986 los recuerdos sobre las erradicaciones y sobre lo ocurrido durante la dictadura estuvieran más frescos. Medina Arispe, boliviano, hijo de indígenas e indigenista, dueño de una alicinante verba jurídico-política, fue, hacia 1979, uno de los promotores y líderes de la Comisión de Demandantes que se atrevió a entablar juicios contra el Estado por las erradicaciones, asunto del que hablaremos más adelante. En aquel año de 1986 Medina Arispe se refería a las víctimas de la represión en las villas de esta manera:

-Sí, de Perito Moreno han desaparecido doce catequistas. Acá, de nosotros (de la 31), han desaparecido dos delegados. Uno de ellos es Francisco Torres, de Comunicaciones, padre de cuatro hijos. Después, el otro que desapareció fue Alberto Condorí.

El padre Pichi confirma el nombre de Francisco Torres como desaparecido. “Sí, el Toto Torres. Fue el capataz cuando hubo que hacer la reconstrucción de 90 casillas después de un incendio, en el ‘72”. En cuanto a Alberto Condorí, es otro de los nombres que quedan en el aire. Johnny Tapia se acuerda de él, pero sólo alcanza a decir: “No lo volví a ver nunca más a partir de entonces”.

Nombres y fragmentos de nombres. En la trabajosa reconstrucción de la lista de víctimas de la represión/erradicación en las villas -trabajosa por imperio del miedo, la desarticulación, las expulsiones, la desaparición social de muchos de los que las habitaron- deben mencionarse al menos provisoriamente estos nombres, y añadirse a los ya mencionados:

-Alberto Cayetano Galleta Alfaro. Había sido erradicado de la villa 31 a Fuerte Apache. Allí vivía: Nudo 6, piso 5, departamento B. Las fuerzas de seguridad acordonaron el edificio en monoblock, lo esperaron apostados y lo acribillaron cuando subía las escaleras, el 9 de julio de 1977. Se lo llevaron en una furgoneta, lo torturaron, lo creyeron muerto y abandonaron su cuerpo. Desvalijaron su casa, un policía usurpó después el departamento, según testimonio de vecinos. Galleta había sido estibador y fue chofer. Un accidente ferroviario lo dejó sin piernas en el año 1976, usaba prótesis. Fue miembro de la Juventud Peronista y del MVP.

-Enrique Sayago también sufrió un accidente en el tren que lo llevaba, aunque leve. Mientras lo estaban atendiendo en el dispensario en que lo atendían, fue secuestrado por la policía, un 10 de septiembre de 1977.

Fue llevado a una comisaría y nunca más se supo que pasó con él. Tenía 62 años, ocho hijos.

-Lucía María Cullén tenía 29 años, era viuda de José Luis Nell, un militante histórico que quedó parálítico en la matanza de Ezeiza. Lucía había trabajado con el padre Mugica en la capilla Cristo Obrero. Fue secuestrada el 22 de junio de 1976.

-Héctor Natalio Sobel. Fue abogado de la UOCRA y de los villeros de la 21. Desapareció el 20 de abril de 1976. Tenía 37 años.

-Teodoro Uruguagha, Ricardo Gamarra Ortiz, Oscar Alfredo Salazar. Los tres eran paraguayos y miembros del MVP, de la villa 21. El 8 de mayo de 1976 el diario La Opinión publicó un parte oficial en el que los nombres de los tres aparecían como presuntos liberados de una comisaría. La fecha de desaparición de todos es coincidente: 5 de mayo de 1976. La compañera de Salazar, María Esther Peralta, mendocona, embarazada de cinco meses, también fue desaparecida.

-Juan Carlos Negrito Sánchez -el apellido no está confirmado- aparece como otro militante del MVP secuestrado y desaparecido en septiembre de 1976.

Juan Cymes añade el apellido de otro Negro, Chanampa, al que se llevaron de la villa 15 -según recuerda- con el pretexto de haber instalado un puesto de choripanes no autorizado sobre la avenida, y al que desaparecieron. Había sido activista en la villa y militante de la UTA. En el Equipo de Antropología Forense confirman el dato aportado por Cymes: Daniel Bonifacio Chanampa, desaparecido el 14 de abril de 1978, trabajador del transporte subterráneo.

Más allá de que a estos nombres puedan añadirse muchos más, de personas que fueron secuestradas y luego liberadas, a partir de aquí las identidades de perseguidos y muertos se ponen más y más difusas. Hay referencias de dos vecinos del barrio Rivadavia, amigos entre sí, de los que sólo sobreviven lo que serían presuntos “nombres de guerra”: Nacho y Eduardo. Alguna vez fueron detenidos por delitos comunes; se hicieron militantes en el contacto carcelario con presos políticos. Nacho participó en una “toma” del barrio policial Coronel García.

Juan Cymes repasa nombres de sobrevivientes de distintas villas que tuvieron actuación destacada, además de Jose Valenzuela: Salvador Herrera, de la 6; la célebre Isidora Penayo de la 21, que a la hora de hacer este libro estaba en el Chaco; el Gordo Caballero de la 20; Marcelino Escalier, boliviano, de la 1-11-14; Pastor Vallejos, también boliviano y pintor, del barrio Illia. A la lista habría que añadir el nombre del Negro Vidal Guzmán, refugiado vía ACNUR en Luque, Paraguay, donde todavía vive.

Queda también la memoria de un nombre un poco más que significativo: el de Rodolfo Walsh. Periodista, escritor, militante. Durante buena parte de los años '72 y '73, Walsh, entonces miembro del Peronismo de Base, se dedicó a ir religiosamente los fines de semana a la villa 31, con su compañera Lilia Ferreyra. Solían caerse por la casa de José Valenzuela -“dirigente indiscutido”, recuerda Lilia- y funcionaban en la de un vecino. Valenzuela había dado con un arquitecto de la CMV, de los buenos, el Cholo Cedrón, que hoy vive en Mar del Plata. Cedrón había trabajado en el proyecto de construcción de viviendas populares de la pequeña Villa 7 de Mataderos, durante la intendencia de Montero Ruiz. El proyecto Villa 7 es un símbolo que queda de aquellas épocas de trabajo conjunto y difícil entre la CMV y los villeros, símbolo también de la confluencia entre clases medias y vecinos de barrios populares. De hecho fue una experiencia que se irradió a otras villas, con la asunción de Cámpora, y un antecedente de las “mesas de trabajo” mixtas surgidas en el '73.

Cedrón venía de esas historias. Walsh, años atrás, había trabajado en una experiencia de comunicación popular que se recuerda hasta hoy: el semanario de la CGT de los Argentinos. Solía irse hasta la 31 con el grabador auestas, para registrar lo que se hablaba y discutía en las reuniones. Con Valenzuela pensaron lo obvio: cómo difundir las tareas, cómo convocar y articular mejor a los vecinos. “Hay que sacar un boletín, una revista”, dijeron. “Pero lo tiene que hacer la propia gente”, agregó Walsh. Así que sobre el pucho inventó lo que hoy se llamaría un taller de periodismo popular. Primera lección: cómo manejar el grabador, que para entonces era tecnología de punta. Entre asados y reuniones, les enseñó a los chicos a grabar, desgrabar y redactar. Hicieron comunicados, boletines, pero la historia no les dio tiempo para que el “Semanario villero” pudiera consolidarse. La historia, ya se dijo en estas páginas, iba demasiado rápido. Walsh y Lilia Ferreyra solían ir en colectivo de su departamento de Tucumán y Reconquista a Retiro. El viaje no podía durar más que veinte minutos. Pero cuando de regreso de la villa bajaban del 6, en pleno centro, en el otro mundo, Walsh le decía a Lilia que la cosa era demasiado rara, que o se iban a vivir a la villa o se dejaban de joder. El antepenúltimo acelerón del ’73 dejó trunca la mudanza. Walsh fue secuestrado y desaparecido por un grupo de tareas de la ESMA entre las 13.30 y las 16 del 25 de marzo de 1977, un día después de distribuir su Carta Abierta a la Junta Militar.

El chico de enfrente, la vecina de al lado.

Magtara, memoriosa, retiene cuatro recuerdos más, de su barrio. El del secuestro de Don Arturo, un viejo militante comunista, hombre de lo más manso, según ella cuenta. El de “el chico de enfrente”, hijo de una de sus vecinas más queridas, cuya identidad prefiere no revelar, que trabajaba en una fábrica, no militaba en nada y nunca más apareció. El de dos hijos de una familia del paraje Las Galeras. Magtara solía encontrarse con la mamá de esos chicos en la verdulería, los hijos de ambas compartían la escuela. “Ella decía que los hijos eran montoneros, pero como yo veía que eran tan buenos todos, para mí no tenía sentido”. Esos chicos desaparecieron. La mujer se apareció con los nietitos en la mano, una noche, llorando y golpeando una ventana. “Se llevaron a mi hija, y a mi yerno, y a mi otro hijo”. Salvaron a los más nenes por esconderlos debajo de la cama.

Magtara finaliza con el recuerdo número cuatro, lo que le pasó a su propio hijo “que estuvo quince días desaparecido y se salvó por milagro”. Presuntamente lo agarraron de los pelos por confundirlo con otro: por llevar un sobretodo gris, por tener cabello castaño y tonada correntina. Lo metieron en algún pozo con dos desconocidos, separados. Picana, dónde está la célula, dónde tenés las armas.

-Sacaron a los otros dos pibes, les sacaron la capucha y él escuchó los tiros de cuando los mataron. Mi hijo dice que él miraba el cielo y pensaba que iba a ser el tercero, que en la casa nunca iban a saber dónde fue a parar.

Al hijo de Magtara le pasaron un cigarrillo, él pensó que lo mataban. Apareció un suboficial que dijo:

-Me parece que este tipo no es. A ver, habló un poco.

El hijo volvió a hablar. El suboficial insistió:

-No. ¿No ves que no sabe nada? Lo están por matar al pedo.

Lo largaron en un descampado.

En el barrio Rivadavia, en Retiro, donde hubo villas quedó tierra arrasada. Montañas hechas con los

escombros apilados y cubiertas de yuyos, cadáveres bajo los escombros nivelados, cloacas y cañerías rotas a cielo abierto, lagunas. En el barrio Rivadavia estuvieron diez años sin agua. “Íbamos a bañarnos -recuerda Magtara- con el caño roto de una casa abandonada. Se hacían unas colas terribles, la gente con la toalla y el jabón en la mano. Y a la madrugada lo mismo, con los tachos, para recoger el agua”.

El Sobreviviente C y su viejo compañero de la 31 y del puerto recuerdan cómo algunos de los más pesados de la CMV, antes y después de demoler, saqueaban a los vecinos. El padre Pichi también rememora la historia de dos abogados ligados al PC, Victoria Novellino y Horacio Rebón -sobre quienes volveremos más adelante-. Esos abogados, los mismos que ayudaron a los primeros villeros que demandaron al Estado, se animaron a enjuiciar a la municipalidad por el robo de material que era de Segba. Ocurre que a menudo las historias de pequeña corrupción, al lado de otras, resultan sólo datos de color.

De regreso al Libro Azul.

A partir de la página 21, el Libro Azul redobla sus energías estadísticas. De los casi 225 mil villeros del '76 se pasa a 146 mil en un año y poco más, a 115 mil para el 31 de diciembre del '78, a 51.845 para el fin del '79, a 40.553 para el 30 de junio de 1980, incluyendo todavía los nueve mil de los NHT y 6465 de los barrios Rivadavia y Mitre. Luego de las estadísticas gruesas se suceden evaluaciones parciales por cada villa erradicada. Y es cierto: en algunos barrios no quedaron sólo escombros e inundaciones. En el caso de lo que las autoridades denominaron villa 40, casi pleno centro, Córdoba y Jean Jaurés, donde antes vivían 380 inquilinos amparados por el ministerio de Bienestar Social, ahora el Libro Azul mostraba las fotos de la bonita plaza Monseñor D'Andrea. Menos avanzadas aparecen las obras en las fotos que se muestran de lo que fue la villa del Bajo Belgrano, pero al menos parecen entreverse calles bien trazadas.

Aparece también la mención de lo hecho con aquel barrio policial, el Coronel García, el de las cien viviendas hechas en material prensado. “El área recuperada -informa el Libro Azul- está comprendida dentro del gran proyecto ‘Interama’ (ya en ejecución) integrado por un parque de diversiones, confitería y jardín zoológico”.

Una pequeña actualización al respecto, como para analizar la proyección actual de asuntos que parecen remotos. El proyecto Interama fue uno de los diversos escándalos de corrupción con que salieron salpicadas las autoridades militares a la hora de la retirada. Y aquella corrupción que parece vieja, siguió saltando en el tiempo, hasta llegar a nuestros días. El 9 de agosto de 1999, en un artículo de La Nación titulado “Acusan a Dromi de cobrar sobornos”, un antiguo funcionario del Proceso aparecía ligado a tales escándalos. Se trata de Guillermo Laura, secretario de Obras Públicas de Cacciatore, el que inició no sólo las obras del parque Interama sino de las autopistas a Ezeiza. Laura fue procesado en 1987 por el asunto del parque Interama. El actual gobierno porteño sigue recibiendo demandas por aquellas historias y sigue pagando los créditos contraídos por la construcción de las autopistas, para cuya realización también se desalojaron personas y se partieron barrios. La noticia de La Nación no estaba tanto dirigida a recordar el pasado de Laura, como a informar sobre un libro que el ex-funcionario presentó por esos días, denunciando que las empresas viales habían pagado un soborno de siete millones de dólares para obtener concesiones de rutas con peaje. Todo este repaso no implica que el intendente Osvaldo Cacciatore no tuviera reparos en lanzarse a hacer política a fines de los '90. Ni tampoco el hecho de que, todavía más hacia atrás en el tiempo, Cacciatore, junto con Carlos Suárez Mason, fuera uno de los integrantes de un intento de putsch contra el gobierno de Perón, en los primeros años '50.

Un recorte al azar de diarios no tan viejos. Uno de Crónica guardado por Johny Tapia en su pequeño archivo personal. “Erradicar las villas”, dice el título de un lunes 16 de abril de 1979. Tras los repases estadísticos de rutina, el diario traslada sin mayores filtros lo que dice Guillermo del Cioppo sobre la política de erradicaciones: “Se destacó en la oportunidad la importancia de la permanencia de esta política, la claridad con que ha sido formulada y concretada, la limpieza con que se ejecutó, toda vez que los métodos se

han ido perfeccionando, teniendo con ello eco favorable”. El párrafo siguiente agrega: “Según las fuentes de la Comisión Municipal de la Vivienda, el propio erradicado se ha ido convirtiendo en promotor de la erradicación”.

Más o menos con la misma alegría y en el mismo diario, el 20 de mayo de 1977, Del Cioppo aseguraba que el 51% de los villeros eran extranjeros, proporción que en otro recorte del 25 de julio de 1978, en La Razón, aparecía súbitamente inflacionada por él mismo: 65%. En el ejemplar de Crónica del '77 hacía observaciones igualmente científicas respecto de la villa 31 de Retiro: “Es un típico pueblo de Bolivia, hasta se vende chuño”. Y, refiriéndose a las villas en general añadía: “Se vive en ellas por comodidad, ya que no se paga ni la luz, ni impuestos de ningún tipo y hasta se instalan industrias”. La solución propuesta por el responsable era simple: “destruir la estructura económica de las villas”. En la página siguiente del diario, el gobernador de la provincia, general Ibérico Sant-Jean bramaba con mayúsculas: “DEBE HABER VIGENCIA DE VALORES MORALES”.

La campaña galopaba briosa por aquellos días. En la sexta de Crónica del día anterior, 19/5/77, Del Cioppo embestía así:

“Es necesario desmitificar lo que en estos últimos diez años se ha venido diciendo y haciendo en relación con las villas de emergencia... Hasta ahora nadie entró en las villas para desentrañar lo que realmente se esconde detrás de las necesidades de un 30 por ciento de los habitantes de las mismas, que en los últimos años sirvieron de clientela política, al amparo de una verdadera mafia que se alberga en ellas”. De pronto los villeros de “escasos recursos” eran sólo uno de cada tres. Y de golpe, en la misma conferencia de prensa, Del Cioppo dijo que el total de villeros de la Capital no eran 200 mil o 220 mil, sino 270.000. Y algunos de ellos hasta tenía “un Falcon 77 y una camioneta”.

Los afanes matemático-científicos de Del Cioppo se prolongaron por años. En Clarín del 19 de mayo de 1981, el funcionario disertaba así:

“Los resultados están a la vista. Producidas las erradicaciones de las villas de Retiro y avenida Perito Moreno se produjo una sensible disminución de los casos de tuberculosis y sífilis, y también del índice de delincuencia”.

Esta serie de extractos periodísticos no se expone aquí sólo para ilustrar cuál era el discurso oficial de las autoridades -no resistido por los medios, sino más bien verticalizado y amplificado- sino también para poner en examen la validez de sus verbosas cuantificaciones. Apuntan también a saber qué pasó con los erradicados y sus cuatro presuntas alternativas de destino, expuestas en el Libro Azul: traslado a terreno propio, retorno a la provincia, retorno al país de origen, traslado por medios propios. Por cada villa erradicada, el Libro Azul abruma con su balance estadístico. Un ejemplo: para la villa del Bajo Belgrano, consumado el desalojo, aparecen 1441 familias derivadas a terreno propio, 166 idas por sus propios medios, 65 que volvieron a la provincia y 43 que lo hicieron a su país. Aparece un quinto rubro que el Libro Azul no preveía: 306 familias trasladadas “a otras villas y NHT”. Si se concede graciosamente el delirio, el total de familias desalojadas coincide con el total de las censadas: 2021. Lo central es que, de manera abrumadora, las autoridades afirman que la enorme proporción de familias erradicadas de todas las villas -en los parciales, siempre un 71 a 73 por ciento del total- fueron ayudadas a instalarse en el bendito “terreno propio”.

Hora de detenerse en este particular.

A dónde fueron a parar.

La primera respuesta de Magtara es del tipo contundente:

-No. Ahí les llevaban y los dejaban tirados por la General Paz. Y a los que habían comprado y alcanzaron a escriturar, les daban tan poca plata que le alcanzaba para comprar quién sabe dónde, una casita miserable. Después se arrepintieron y muchos volvieron a algún terreno.

Lo mismo dice Johny Tapia respecto de los de Retiro:

-Los dejaban en cualquier lado, en unos pantanos, del otro lado de la General Paz. Con el tiempo, los que pudieron demostrar que eran de la villa, volvieron.

También el compañero silencioso del Sobreviviente C, en la villa 21, recordando el caso de un vecino suyo:

-Lo cargaron en camión, lo dejaron en Lugano. A la semana lo volvieron a cargar y lo tiraron en la 1-11-14, sin terreno ni nada. Yo me fui a José C. Paz por mi cuenta.

Quizá el caso del barrio Rivadavia fue el más particular, siendo que los vecinos habían pagado o venían pagando por su vivienda. De manera tal que cuando llegó la CMV centenares de familias se apuraron en vender hasta lo que no tenían para terminar de pagar, tener la escritura y mostrarla a los funcionarios.

-Nos pidieron esa plata, nos dijeron: “En dos días tiene que juntarla, si no, no tiene derecho”. “¿Y todo lo que pagué?”. “No, todo lo que pagó no sirve porque usted no canceló todavía”. Ellos querían echar a todos, al que no había escriturado y al que sí. Muchos de los que ya tenían la escritura se fueron, por temor, se fueron.

Hacia 1979 las autoridades se aprestaban a erradicar a un nuevo total de 64.000 villeros más, el grueso de lo que faltaba. Pero ese año hubo un cierto toque de inflexión y una demora en los ritmos, reconocida con pesar en los balances del Libro Azul, página 86:

“En el gráfico comparativo siguiente puede observarse la diferencia evolutiva de las erradicaciones efectuadas... El decrecimiento operativo evidenciado en esta última etapa, es esencialmente producto de dos factores principales:

1- El Movimiento Pastoral Villero, en conjunción con Cáritas, inició en la segunda mitad del año 1979 su acción en las villas, tendiendo a la obtención por parte del Estado del pago de un subsidio a cada familia y la formación de cooperativas de vivienda.

2- Encontrándonos en la última etapa del proceso se da la existencia de un residual compuesto por grupos económicamente imposibilitados de toda solución”.

Efectivamente, era todo un problema ése del “residual compuesto” y de las familias imposibilitadas, pese a las previsiones del principio acerca de los “escasos recursos” de todos y a todo lo que se había prometido en materia de créditos.

Vamos primero a lo de las promesas originales y luego iremos a la pastoral villera. Según rememoran

Marta Bellardi y Aldo de Paula en *Villas Miseria: origen, erradicación y respuestas populares*, en mayo de 1978 el Estado dispuso un “sistema de apoyo pecuniario” para las familias que iban a ser erradicadas. Se trataba de entregar un subsidio de 12 pesos argentinos destinado exclusivamente al adelanto del pago de un lote, con el compromiso urgido del beneficiado de abandonar la villa en un plazo de entre 60 y 90 días. Se entregaban además otros 18 pesos argentinos para cubrir los gastos en servicios de infraestructura. Los autores del libro se tomaron el trabajo de averiguar cuánto costaba un terreno del Gran Buenos Aires hacia agosto de 1978. Un lote en Moreno valía 50 pesos argentinos, en Guernica valía 100. Los doce pesos del primer subsidio equivalían a cuatro salarios mínimos de entonces, el terreno de Guernica equivalía a 26 de esos salarios.

Sin embargo Del Cioppo había dicho en algún momento que el 70% de los villeros estaban en perfectas condiciones de abandonar los barrios por su cuenta. Algo fallaba, y en las páginas del Libro Azul, ya hacia el final (página 99), cuando se hace repaso de los créditos de los que se había hablado al principio, los destinados a la compra de un terreno, se incluye apenas un único parcial, el que corresponde al segundo trimestre de 1980. Se habla de un total de 982 entrevistas efectuadas con los potenciales beneficiarios, de 200 trámites iniciados y de 106 créditos efectivamente otorgados. No existen más explicaciones de por qué aparece sólo ese parcial de 106 créditos otorgados en el marco de un documento oficial de 114 páginas que pretende sistematizar la historia de, hasta entonces, 145 mil erradicaciones.

Una última referencia acerca de la ayuda oficial y de aquel “plano prototipo” con el que los erradicados, una vez optimistas sobre su nuevo lote, construirían la casa propia. Bellardi y De Paula hacen constar algo al respecto: la absoluta “inutilidad” del plano. Cuando los ya ex-villeros, estuvieran donde estuvieran, concurrían a las municipalidades para que les aprobaran los planos de construcción, “eran echados sistemáticamente”.

Siete-curas-villeros-siete.

Juan Cymes los vio llegar a unos cuantos, desde el otro lado de la General Paz, en la villa Las Antenas de La Matanza, allí donde se había refugiado.

-No sólo que los vi llegar, los vi llegar a patadas.

Un domingo, en 1978 o 1979, vio cómo varios camiones se metían por los fondos de la villa, en lo que hoy se llama la manzana 27. Llovía y los camiones se pusieron a descargar: gente, muebles. Juan se preguntó lo mismo que los vecinos de Las Antenas: “¿Qué hacen estos? ¿Están trayendo gente? ¿Pero acá?”.

-Era un contingente que habían erradicado de la 1-11-14. Los dejaron sobre un terreno que entonces era puro descampado, entre la villa y las vías. Esos terrenos no eran parte de la villa, eran municipales. Los tiraron sobre ese terreno pelado que con la lluvia se había hecho chocolate, era una cosa inhumana. Y volvieron a los pocos días para llevarse otra vez a algunos. Después, con el tiempo, esos terrenos fueron las actuales manzanas 27 y 28.

Esta referencia que hace Juan Cymes, junto con todas las anteriores contadas por Magtara, Johny, el Sobreviviente C, son apenas una porción minúscula del total. Muchas otras historias similares fueron resumidas por siete curas villeros en lo que fue un informe célebre: “La verdad sobre la erradicación de las villas de emergencia del ámbito de la Capital Federal”. Ese informe -precedido de uno anterior, junio de 1978- fue fechado el 31 de octubre de 1980 y lleva al pie los nombres de esos siete curas: Héctor Botán, de Villa Lugano; Miguel Angel Valle, del mismo barrio pero de otra capilla; Daniel de la Sierra (alias El Gallego), de Barracas; Rodolfo Ricciardelli, del Bajo Flores; Jorge Vernazza, también del mismo barrio y

otra capilla; José Meisegeier, o Pichi, de la capilla Cristo Obrero de Retiro y Pedro Lephaille, de Mataderos.

Es posible imaginar que más de alguna alta autoridad eclesiástica habrá suspirado de irritación al recordar aquella autorización del arzobispado de 1969, la que permitió oficializar de alguna manera el trabajo de la Pastoral Villera. Porque, aunque sin recursos y de manera sumamente precaria, esos siete curas -para usar la vieja expresión española- metieron un jaleo importante ante las autoridades, los medios y la propia Iglesia. Los siete curas y los más que vulnerables núcleos de villeros resistentes, fueron los únicos que a mediados de la dictadura se atrevieron a difundir lo que estaba sucediendo, enfrentando la versión oficial. La Pastoral Villera lo había intentado antes, ante el arzobispado, todavía en 1977, pero el arzobispado recomendó lo que a veces recomiendan los arzobispados: prudencia y sigilo.

Sin embargo, hacia 1979, las cosas estaban cambiando. Ya no imperaba la glaciación política de los primeros años, la tarea represiva de la dictadura estaba prácticamente finalizada, los excesos de las erradicaciones habían ganado algún mínimo espacio en la opinión pública. Con lo que el arzobispo se decidió a enviarle una epístola al señor intendente, fechada el 23 de agosto de 1979, en la que expresaba su preocupación por la forma en que, según parecía ser, se llevaban a cabo las erradicaciones:

“Estimamos imprescindible que se ponga especial cuidado en que nadie utilice, consciente o inconscientemente, la presión, la intimidación o cualquier otro estilo o forma de trabajo que pueda quitar la paz y la calma para el trabajo fructífero”.

Que el trabajo de la CMV a esa altura ya había sido lo suficientemente fructífero lo demostró acabadamente el Informe de los siete curas villeros, un año después. Pero antes que el Informe llegara a la opinión pública los medios fueron filtrando pequeñas denuncias, conflictos y la permanente megafonía de la versión oficial. Entre las denuncias, seguramente lo que ocupó más espacio en los medios desde 1979 fue la conformación de la Comisión de Demandantes, aquella que Johny Tapia y Efraim Medina Arispe motorizaron desde lo poco que quedaba de la villa de Retiro y en la que Juan Cymes también tuvo participación.

El padre Pichi, desde la piecita de arriba del almacén que tenía en la villa de Retiro, pegado a la capilla, había conseguido el distinguido amparo de la parroquia San Martín de Tours, gente pudiente, como él bien define. Cáritas y la parroquia lo apoyaron para iniciar proyectos de autoconstrucción en cooperativa y salvar con ellos a la poca gente que quedaba en la 31, 70 familias que terminaron siendo 44, contra las seis mil estimadas en el '76. La creación de la cooperativa Copacabana fue fruto de ese tipo de esfuerzos, lo mismo que otras como la Caacupé o la Madre del Pueblo, motorizada por el padre Vernazza en el Bajo Flores y amparada legalmente por el CELS. El vecino del padre Pichi, Johny Tapia, pudo quedarse en la villa agarrado de ese solo hilo: el auspicio de Cáritas, la protección de un espacio ínfimo del barrio en el que quedaron unos pocos vecinos. Ese grupo de vecinos acudió a la Asociación de Abogados y allí dieron con dos profesionales solidarios y audaces que ya fueron mencionados: los doctores Victoria Novellino y Horacio Rebón. “Ellos nunca nos cobraron un peso; ponían plata de su bolsillo”, agradece Johny Tapia.

La estrategia de los abogados fue medianamente simple, si es que algo podía ser simple en semejantes años. Consistió en demostrar que la municipalidad de Cacciatore nunca había cumplido la promesa de ayudar a los erradicados antes de quitarles la vivienda y de quitárselos de encima. El jueves 27 de diciembre de 1979, Crónica, en referencia a aquella causa denominada “Asunción Soria y otros contra la Municipalidad de Buenos Aires”, que representaba los intereses de 32 familias demandantes, amaneció así:

“La Sala C de la Cámara Civil admitió un amparo interpuesto por 32 familias afectadas por el plan de erradicación de villas de emergencia y declaró la medida de no innovar. La decisión, que implica ‘la prohibición de demoler las viviendas’ de los villeros hasta tanto no termine el juicio, se dictó porque la

Municipalidad no cumplió ‘la exigencia de crear condiciones para que los desalojados puedan acceder a viviendas decorosas’”.

De haber existido más Johnys Tapias, padres Pichis, abogados y camaristas así, las cosas hubieran sido algo distintas. El falló sentó jurisprudencia y fue repercutiendo en cadena entre los sobrevivientes de otras villas. El doctor Del Cioppo montó en cólera. Especialmente cuando le preguntaron sobre los recursos judiciales que venían presentando los villeros:

-Muchos de esos pedidos fueron firmados por gente que no sabe lo que firma. La mitad de esas personas ya desistieron y abandonaron las villas.

Sin embargo hubo otros recursos de amparo, en la 21, en la 1-11-14. En esta última villa, la del Bajo Flores, los sacerdotes Rodolfo Ricciardelli y Jorge Vernazza, junto con Emilio Mignone, del CELS, venían trabajando para proteger a la gente que quedaba por erradicar. Hacia abril de 1979 ya venían haciendo cuentas para saber si podían o no avanzar en el proyecto de creación de la cooperativa Madre del Pueblo. En junio de ese mismo año, Mignone presentó el recurso de amparo que firmaron 87 peticionantes. Las tierras en las que vivían, decía Mignone, habían sido ocupadas “no sólo con el expreso consentimiento y ayuda de las autoridades municipales sino también con su apoyo”. Los primeros pobladores, agregaba, habían adelantado pagos por esas tierras y sus mejoras.

Aquel recurso prosperó, o al menos dio el tiempo suficiente como para que prosperara el proyecto de autoconstrucción de la cooperativa Madre del Pueblo. Financiado en sus principios por una fundación holandesa -y ésta financiada a su vez por un fondo proveniente de un impuesto a los cultos religiosos, destinado a la ayuda social-, aquel proyecto cooperativo nacido de una situación de extrema vulnerabilidad, todavía vive. Osvaldo Oriolo, de profesión ingeniero, presidió los primeros emprendimientos, de puro filántropo y visitando las obras los días sábados. Aún a la distancia valora la calidad y la ejecutividad con que se hicieron esos barrios, construidos por los villeros mediante un sistema de autogestión. Primero fue uno para 60 familias en San Justo, luego otro para 120, en Merlo, y luego un tercero para más de quinientas familias en Laferrere. La experiencia se proyectó -decíamos- hasta el presente. Según repasa Oriolo, hasta hoy, aún con cambios en el sistema, lo que nació como cooperativa Madre del Pueblo suma 1500 viviendas construidas.

Rajá, “Cascarita”, rajá.

A Víctor Sahomero también lo terminaron de salvar las cooperativas. Pero antes le hicieron batir -con un fierro puesto en la cabeza- todos los récords posibles, por la cantidad de veces que lo rajaron. Víctor vendría a representar a esta altura de lo leído la “quinta presentación” de villero peleador y sobreviviente. Si recién ahora aparece en estas páginas es por lo que representa su historia de aquellos años y por lo que hace hoy.

Fue en la villa de Retiro donde le pusieron Cascarita, porque se aparecía con la piel de la cara paspada. Llegó con la madre y seis hermanos en 1968 y el primer barrio en el que se instaló fue el Inmigrantes, donde ya estaba su viejo. El tenía ocho años, la familia venía de Salta y antes que eso, por línea paterna, de Bolivia. La madre de Víctor falleció, el padre no pudo contener el desbande. Víctor se rajó de la casa y a partir de ahí anduvo por todos lados: en la calle, en el puerto, en el bar “El cura gaucho” de la 31, del que sólo quedan restos, dando vueltas entre los dirigentes portuarios, lustrando botas. Supo andar también en la famosa guardería “Bichito de luz”, de la 31, y fue ahí o en otro lado que le enseñaron a pintar al óleo. Comenzó a trabajar desde muy chico, no paró de trabajar hasta ahora. Iba y venía a veces a la casa del viejo, que trabajaba de albañil; anduvo con él por el barrio YPF. Del YPF la familia pasó al barrio Martín Güemes -siempre dentro de la 31-, hasta que en 1976 a esa casa los que ya se sabe la tiraron abajo. Los trasladaron a una casa de chapa a cuya familia ya habían desalojado.

Víctor siguió laburando. Anduvo entre otros lugares en el mercado de ajos y cebollas, que por entonces funcionaba en los galpones del ferrocarril San Martín. Hombreaba bolsas, por cada una agarraba un ajo y una cebolla. Repartían con los compañeros. Al cabo del tiempo se hizo unos mangos, compró o levantó un casita. Era de material, de nuevo en el Inmigrantes, cerca de la escuela Albert Schweitzer. La noche del 23 de abril de 1978 Víctor fue a festejar su cumpleaños en la escuela. A eso de las siete de la mañana volvió a la casa. La casa no estaba más: acababan de demolerla, a la suya y a la otra que se había hecho una de sus hermanas. Víctor pretendió retobarse. Le pusieron un fierro en la cabeza, lo cagaron bien a palos. De las casas sólo pudieron rescatar algunas chapas y tirantes. Los de la CMV ya habían subido algunas cosas al camión. Los subieron a ellos, los tiraron en los fondos de Retiro. Al tiempo los sacaron, los volvieron a subir al camión, los tiraron en la manzana 18 de la villa 20, en Lugano.

Si desde un primer momento los pesados eligieron ensañarse con Cascarita no fue por casualidad. Víctor se había metido en la Comisión de Demandantes de Retiro, era el más pendejo de todos ellos. El día de su cumpleaños, cuando le tiraron la casa abajo, cumplía los 18. En la Comisión comenzó a conocer a otros dirigentes, el Papy Caballero, Salvador Herrera, Juan Cymes. El dice que fue natural que se metiera con ellos, “porque el villero no piensa para sí solo, piensa para sus vecinos”. Y aunque reconoce que tuvo miedo, dice que no fue tanto: “porque era inconsciente, de pendejo que era. No tenía conocimiento de lo que hacía”. A la hora de ir y venir de las reuniones, Víctor hacía lo que los demás. Sabía que lo seguían pero conocía mejor el terreno. Así que elegía el mejor pasillo a la hora de despistar. De todas maneras lo agarraban dos veces por semana; le hacían averiguación de antecedentes, lo metían en cana, lo tenían de hijo.

La rutina no se interrumpió cuando lo echaron de la villa de Retiro para siempre. Ni bien lo tiraron en la manzana 18 de la villa 20, a Víctor lo volvieron a cagar bien a palos y le dijeron clarito:

-Acá, pendejo, nada de organizar nada ni de armar quilombo.

Los tipos sabían bien lo que hacían, gente seria. Víctor siguió en la misma: laburando, participando en las reuniones con los vecinos. Volvió a levantar la casa, otra vez de material. Llegaron los otros, se la volvieron a demoler. Lo tiraron en la manzana 6 y con el tiempo pasó lo mismo: llegaron, demolieron, lo rajaron. Al menos la tercera manzana en la que lo tiraron, la 12, fue la vencida. Aunque de vez en cuando volvía a pasar: Víctor saliendo de un partido de fútbol y de pronto aparece la cana y le dice “Contra-la-pared-carajo”. Algunos amigos o conocidos prefirieron dejar de verlo. El asunto es que desde entonces él vive ahí: en la manzana 12, casa 22. Con su mujer y con sus cuatro hijos. El mayor ya tiene 16 y pasó a quinto año. “Muy bien el chango”, dice Víctor.

Y ahora a explicar la primera línea de esta historia. En la 20 de Lugano hoy viven 28 mil personas. En el '76 eran unas 4300 familias. El Proceso las redujo a 800 hacia 1980. Para el '82 eran unas 40 o 50. Esas pocas familias pudieron quedarse tanto por los amparos judiciales como por las dos cooperativas que formaron los vecinos: la “5 de noviembre” y la “18 de febrero”.

Víctor, que ya no es más Cascarita -eso fue en Retiro-, es empleado municipal. De siete a once de la noche dice que trabaja, porque al regreso del trabajo se dedica a otra cooperativa más, la “25 de marzo”. La cooperativa ya es propietaria de nueve manzanas. Por estos mismos días, con la CMV, sus integrantes discuten la cuestión de los lotes, los planos, la construcción ordenada. Como las otras dos anteriores, la “25 de marzo” se llama así en homenaje a la fecha de su fundación.

-Y mirá qué casualidad -dice-. El 25 de marzo es la fecha en que mataron a Alberto Chejolan. 25 de marzo de 1974.

-¿Le van a cambiar el nombre a la cooperativa?

-No, pero estamos pensando en ponerle “Alberto Chejolán” a un pasaje.

Dice Víctor que aunque a su padre le costó contener a los hijos, al punto que él fue chico de la calle, hay cosas que mamó del viejo, como las ganas de trabajar con la gente. Y agrega que en realidad eso viene de lejos, de la abuela boliviana que ya armaba quilombo en Talara, su pueblo de Cochabamba.

De regreso a la escena.

Estábamos con la escena en la que Del Cioppo montaba en cólera, por culpa de los demandantes villeros que no sabían lo que firmaban. Aquella frase aparece en la ya citada nota de Clarín del 19 de mayo de 1981, en la que el funcionario abundaba sobre el fin de la sífilis, la tuberculosis y la delincuencia. El Clarín de ese día da alguna pequeña pauta de que las cosas se le estaban poniendo espesas a la dictadura. Por un lado el general Viola diciendo (páginas 2 y 3) “Se reactivará el aparato productivo”. Por el otro las páginas interiores con el título “Suspensión masiva en una planta automotriz”. La información hablaba de Sevel, pero también de suspensiones en Materfer, cesantías en IKA-Renault y despidos en Metalúrgica Tandil.

Con todo, la especialidad de Del Cioppo era otra, la de los planes erradicadores, y la de hacer balances de lo bien que andaban las cosas en su área. Sólo quedaban 3500 familias de villeros por erradicar, anunciaba el hombre. “Las dificultades en el cobro de los créditos de apoyo responden a problemas culturales”, explicaba. “Se dio a los villeros apoyo técnico, asesoramiento para la compra de terrenos, transporte gratuito de materiales y enseres, traslado de grupos de trabajo, créditos de fomento de ínfimos interés y largo plazo”. Algún periodista se animó a preguntarle, ¿cómo es eso que se dice, que están apareciendo nuevos núcleos de villas en el conurbano?

-Por ahora hay que crear una frontera en la General Paz-, decía Del Cioppo, más o menos como Alsina vislumbrando la zanja contra el indio.

Pero ocurría que hasta los intendentes del conurbano -desde San Isidro a Almirante Brown y de La Matanza a General Sarmiento- comenzaron a protestar por la cantidad de villeros que les estaban lloviendo. Llegaron a registrarse hasta cuasi enfrentamientos armados entre personal de la CMV y el Ejército, de uno y otro lado de la zanja de Alsina o General Paz. En Merlo, el intendente/brigadier llegó a emplear vehículos y helicópteros para impedir una curiosa “toma de plaza” de camiones de la CMV cargados de erradicados. El gobernador bonaerense salió a “lamentar” las políticas “parciales” de la comuna porteña y también espetó:

“Digo con una crudeza un poco irónica que no tengo a quien pasarle las villas de emergencia. Entonces debo resolver el problema”.

El gobernador/general Gallino pudo haberse inspirado en el ilustre ejemplo tucumano de su colega general/gobernador Domingo Bussi, que también expulsaba pobres en camión y los dejaba en Santiago o Catamarca. Amén de lo escrupuloso que era para pintar menhires indígenas de celeste y blanco.

Letra y sangre.

Los siete curas villeros, cuando redactaron su Informe sobre la erradicación, no se anduvieron con chiquitas:

“Las razones en que se basó este tremendo operativo fueron en el fondo meramente estéticas, edilicias y mezquinas: las villas miseria afeaban la ciudad y había que recuperar terrenos para la comuna. Las ordenanzas municipales que lo determinaron no se cumplieron respecto a ninguna de las inexcusables previsiones que en su letra tenían acerca de los erradicados: ni se hicieron loteos, ni se tomó ninguna medida activa en orden a ‘crear las condiciones para que los grupos familiares puedan acceder a una vivienda decorosa’, ni se prestó la ‘ayuda pecuniaria’ de la que en ellas se hablaba, ni se otorgó ninguna clase de subsidios”.

Era un lenguaje bastante más que frontal como para que la cúpula de la Iglesia se atreviera a ampararlo. Los siete curas, antes de difundir nada, debían respetar las reglas de la casa y pasarle el documento al arzobispo, cosa de que lo aprobara. Como era de prever, cuando el arzobispo Aramburu recibió el documento -veinte páginas y vehementes-, acudió a un ardid típicamente vaticano. Dijo: “Esto no fue protocolarizado”. Y pretendió dormirlo en un cajón. Pero los siete curas persistieron. Dijeron que ésa era la tercera vez que hablaban del tema con el hombre. Por lo que hicieron llegar el documento a la prensa.

“Nosotros, un pequeño grupode sacerdotes, sin apoyo ni medios, no hemos podido montar una oficina con personal y recursos para elaborar cifras y estadísticas. Pero hace más de diez años que trabajamos en estas villas y desde hace ya más de tres, que diariamente hemos tenido que escuchar y compartir las angustias de miles de erradicados; hemos visto con nuestros propios ojos centenares de familias realojadas de una villa a otra, en condiciones cada vez más miserables; hemos visitado varios lugares del Gran Buenos Aires donde se levantaron nuevas y peores ‘villas’ con los erradicados de la Capital Federal”.

“Para dar cifras -decían los curas- habría que rastrear todo el Gran Buenos Aires”. Sin embargo se las ingeniaron muy bien para dar unas cuantas pautas de lo que decían, refiriéndose puntualmente a lo que pudieron relevar e incluyendo fotografías de lo que describían:

-En González Catán, sobre ambas márgenes del arroyo Las Víboras, en su cruce con la ruta 21, una flamante y muy miserable villa.

-En Lomas de Zamora, inmediaciones de Villa Albertina, cantidad de casillas recientes agregadas a las que ya existían.

-En Isidro Casanova, barrio San Alberto, el antiguo Núcleo Habitacional Transitorio de la calle San Petersburgo. “Muchos lo pronosticaron: dichos núcleos, por su exigua y precaria construcción, se convirtieron en nuevas ‘villas’... En ellos han sido ahora ‘reubicados’ muchos de los actualmente erradicados, donde están en iguales o peores condiciones que las anteriores. Con el agravante de que a los allí trasladados no se les permitió llevar sus antiguas pertenencias, ni chapas, ni maderas, ni ladrillos... y deben además pagar una especie de alquiler, alrededor de los \$100.000”.

-Dentro mismo de la Capital Federal, en la ‘villa’ llamada ‘Ciudad Oculta’.

Muchos de los erradicados, continuaba el documento, quedaron en terrenos con sus chapas y maderas, a la intemperie, “sin ningún tipo de construcción en la que pudieran albergarse”. “Muchos fueron también los que, ante la desesperación de quedarse sin techo, se endeudaron bajo condiciones leoninas, con la compra de un terrenito que, durante largos años, tendrán que pagar en cuotas cada vez más elevadas, y con la amenaza siempre pendiente de perderlo”.

El párrafo más célebre del informe fue el que decía esto:

“Por lo tanto, todas estas familias expulsadas de las villas de la Capital Federal han sido trasladadas con su ilegalidad y su miseria (subrayado en el original), a los municipios del Gran Buenos Aires. Con el agravante de que la infraestructura, los servicios y los recursos de estos municipios para asimilar estos nuevos contingentes de población son muy inferiores a los de la Ciudad de Buenos Aires, la que, por otra parte, recibe la casi totalidad del aporte laboral de todos ellos”.

Valía la pena que los siete curas villeros entregaran el documento a la prensa, saltando alguna vaticana regla. Supieron a los pocos días de la difusión del informe que el brigadier Cacciatore tronó -“Esos no son curas, que los rajen”- y que presionó sobre la Iglesia para que los echaran a patadas. Monseñor Aramburu fue más prolijo: aplicó sobre ellos lo que se llama una “amonestación canónica” -tarjeta amarilla, se apura a traducir el padre Pichi-, cosa que los sacerdotes soportaron dóciles y felices. Según escribió Emilio Mignone en su libro Iglesia y dictadura, los vicarios que transmitieron la sanción explicaron a los siete curas que sus pataleos habían enturbiado una negociación importante entre arzobispo y municipio: subsidios para la adquisición de una residencia, en la que el arzobispo aspiraba a residir tranquilo. Nada demasiado grave. El padre Pichi recuerda que al poco tiempo al Gallego de la Sierra -que ya había desafiado a Cacciatore en el programa televisivo “Almorfando con La Chona”- se le ocurrió organizar un trueque de juguetes bélicos por pelotas, para lo cual convocó al premio Nobel de la Paz y reverendísimo subversivo Adolfo Pérez Esquivel. Lo desterraron al toque, pero no muy lejos: quedó en Quilmes, con el obispo Novak

Más allá de todo esto que hoy se pueda contar con alguna amabilidad, más allá del tiempo transcurrido y de las historias expuestas hasta aquí, todavía hoy el informe de los curas villeros resulta desgarrador. Especialmente las diez carillas escritas en una tipografía trabajosa y menuda, en la que los sacerdotes volcaron decenas de historias de erradicados que ellos mismos se ocuparon de registrar y hasta de fotografiar. La vieja marca de Cristianismo y Revolución parece estar presente en la forma en que resumieron esas historias, de las que aquí sólo reproducimos dos, sin entorpecerlas con comillas.

-Ramón Antonio Vázquez (DNI 7.102.652) vive en la casilla N° 483 de la Villa de Emergencia N° 21 de Barracas. Trabaja como changarín en diversas panaderías de la Capital. Gana \$18.000 por día. No consigue trabajo a causa de su edad -49 años- y de su enfermedad -tuberculosis pulmonar-. Tiene un hijo de corta edad, que también está enfermo e internado en el hospital Tornú.

El domingo 15 de junio, a las 10 de la mañana, un empleado de la Comisión Municipal de la Vivienda se acercó a su casilla exigiéndole que tenía que abandonarla e irse. Al responderle el interesado que no tenía dónde ir a vivir, y que además estaba enfermo, dicho empleado le empezó a dar puntapiés y trompadas, mientras le decía que “le iba a llevar preso y le iba a quemar el rancho con todo lo que tenía dentro”.

-El día 9 de junio de 1980, siendo aproximadamente las 21.30, dos empleados de la Comisión Municipal de la Vivienda se hicieron presentes en la Casilla N° 522 de la Villa de Emergencia N° 21, ocupada por Valentina de Alcaraz (DNI 92.213.160) con su familia. Los dos empleados municipales se hallaban en estado de ebriedad, a juzgar por su incoherencia en el hablar y por su dificultad para tenerse en pie. Traían en un fuentón botellas de vino, paquetes de harina y sachets de leche.

Después de entrar en la casilla de la nombrada sin llamar ni pedir permiso, le pidieron que les regalara alguna botella de coca-cola. Al negarse la vecina a darles la bebida, le amenazaron diciéndole que la iban a desalojar en 78 horas. Al salir de aquí se fueron a otra vivienda cercana, la casilla N° 497, habitada por María Inés Carballo (C.I. Prov de Misiones N° 195.628), quien en ese momento no se encontraba en casa. Después de patear la puerta repetidas veces, y para que no la tiraran abajo, les abrió la hija, Teresa de Jesús Carballo, a

quien le hicieron el mismo pedido de coca-cola que habían hecho a la anterior. Como se negara a entregarles la bebida, la agarraron por un brazo y se lo retorcieron, la empujaron contra la pared y amenazaron golpearla con una botella de vino vacía que traían. Al salir un hermano más pequeño gritando y pidiendo auxilio a los vecinos, los empleados municipales abandonaron la casilla.

Son sólo un par de testimonios de la previa a las erradicaciones. Le siguen más adelante lo que cuentan los ya depositados, más allá de la General Paz. Es oportuno citar ahora de manera completa una frase ya anticipada del comisario inspector Lotito:

-Siempre que se opera hay sangre. En este caso de la erradicación de las villas de emergencia pasa lo mismo. Se trata de un cedazo social. Alguien lo tiene que hacer. Acá siempre se critica al que hace algo. Son los riesgos que se corren en la función pública.

Bastante más atrás en este trabajo, se mencionó a Sarmiento. Queda claro que los que en 1976 pretendieron aplicar sus buenas ideas, apelando a terceros o convirtiéndose ellos mismos en mazorqueros, antes que a la civilización trajeron la barbarie.

En las páginas postreras del Libro Azul están los resultados finales recopilados por los funcionarios de la dictadura. Esa recopilación está precedida por este título: "Costos". "Costos", equivale a camionadas. Sólo para el período enero/mayo de 1980 figuran 1872 familias erradicadas (106 eran los créditos otorgados) a un "promedio", demorado por culpa de los curas, de 12,48 erradicaciones diarias. La CMV debió implementar 2.217 viajes de camiones con baranda cuyos motores estuvieron funcionando durante 75.901 horas (y treinta minutos). Los camiones volcadores rodaron 1.749 veces, empleando un tiempo de 39.202 horas. Los rastrojeros: 1.154 viajes, 13.817 horas rodadas (con treinta minutos). Las palas mecánicas fueron usadas en 88 ocasiones, a lo largo de 5.603 horas.

En algunas cosas los funcionarios eran puntillosos.

Que digan dónde están.

Con los años las herramientas de la estadística y de las ciencias sociales dieron la razón a lo que los siete curas villeros, ayunos de laboratorio pero concededores del terreno que pisaban, dijeron en su informe. Los números demostraron antes incluso de la retirada de la dictadura que los partidos más alejados de la Capital Federal experimentaron un crecimiento de población, especialmente de familias hacinadas en viviendas precarias. La Matanza captó la mayor proporción de erradicados (21%), seguido por Lomas de Zamora (9,6%), Merlo (8%), Moreno, Quilmes, General Sarmiento y Florencio Varela. En el año 1981 comenzó a producirse en varios de esos partidos un nuevo fenómeno social: el de la formación de asentamientos.

Para las autoridades porteñas, sin embargo, no cabía duda de que el vasto plan erradicador había sido exitoso. Si se tienen en cuenta las intenciones oficiales y de qué manera las autoridades habían abundando en el asunto de los "fracasos" de otros gobiernos, no cabe duda de que tuvieron razón. De 13 villas que existían en el '76, y que abarcaban al 91% de la población, tres fueron barridas y las demás reducidas poco menos que a cenizas. Para cuando la CMV hizo imprimir el Libro Azul, los datos al 30-6-80 indicaban que sólo faltaban 25 mil villeros por erradicar (sin incluir los NHT y barrios como el Rivadavia). Al año siguiente las autoridades decían que sólo quedaban 3500 familias villeras en toda la ciudad. Manipulando una vez más las cifras, en agosto de 1980 el gobierno intensificó la campaña publicitaria: "En la Capital vivían en 1976 165.000 personas. El 76% -123.000- viven actualmente en casa propia".

Antes habían partido de otros números iniciales: entre 225 y 270 mil. Aquel despliegue publicitario era

parte de una campaña de grandes avisos oficiales que estaban encabezados con el slogan “¿Por qué Argentina Camina?”. En distintos momentos esas campañas -diseñadas por agencias privadas nacionales y extranjeras- adoptaron diversos formatos, dependiendo de la época. Una decía: “Si la Argentina es hoy uno de los mejores países del mundo... ¿Por qué tenemos problemas?”. O su variante: “El mundo tiene cinco grandes problemas (cinco dibujitos indicaban: exceso de población, falta de alimentos, problemas raciales y religiosos, escasez de energía, economías estancadas con desempleo). La Argentina no tiene ninguno. ¿Entonces?”. Hacia fines del Mundial '78 había sido el enorme “Estoy orgulloso”. Y un año antes: “Unámonos... y no seremos bocado de la subversión” (ilustrado con el dibujo del mapa argentino puesto sobre un plato y, a los lados, el tenedor y el cuchillo).

Las estadísticas oficiales que se heredaron, siempre con su margen dudoso, indican que hacia 1983 sólo quedaban entre 3500 y 12.600 villeros en toda la Capital. Es muy posible que las autoridades “inflaran” el número de erradicados ya que a los efectos de su estrategia de marketing político -lo que implica decir: para ganarse la aprobación de buena parte de la sociedad- el éxito erradicador las prestigiaba. Como los siete curas villeros que se dedicaron a registrar padecimientos, sin “técnicos” a los que recurrir, Juan Cymes también es conocedor del terreno y relativiza las cifras oficiales. Repasando y sumando más o menos de memoria cada uno de los parciales por villa, Cymes cree que al cabo de la dictadura todavía quedaban entre 15 y 20 mil villeros. Y sospecha que hoy rondan los 150 mil.

La sospecha nos lleva a la asunción de Raúl Alfonsín, los años de la democracia y al presente, comenzando por una intervención de Magtara:

-Nosotros vimos a algunos que volvieron al barrio, o los hijos. Eso pasó una vez en tiempos de Alfonsín: que tomamos los terrenos pero con permiso de una funcionaria. Le pedimos que los hijos nuestros, que vivían amontonados en la misma casa, o los hijos de los que les tiraron la casa, pudieran tomar esos terrenos. Ella de palabra nos dijo que sí, que después nos iban a regularizar. Y todas las noches teníamos que salir a la calle, a avisar a la gente, para cuidar esos terrenos. Formamos una comisión. A los que querían entrar, primero le hablábamos de buen modo. Les decíamos por ejemplo: “No, ustedes tienen casa en Laferrere; no pueden venir a estos terrenos. Los van a limpiar los hijos nuestros o los hijos de los que les tiraron las casas”.

El mismo regreso de viejos y nuevos vecinos fue comprobado por Johny Tapia en Retiro o por la gente de la 21 en Barracas. En su libro *La fuerza histórica de los villeros*, Juan E. Gutiérrez, que ya en los años democráticos supo ser cura villero en la villa 15, y que conoció alguna razzia monumental como la de octubre de 1987, repasa con una mezcla de perplejidad y consternación cómo a su llegada a la villa los vecinos se reiteraban en testimonios sobre erradicación y repoblamiento. Cita entre otros el relato de la hermana Teresa Mauro, aparecido en una revista católica: “Yo llegué en el año 1979 y había unas 1345 casas; con las erradicaciones quedaron unas 200. Después, hacia fines del Proceso, comenzamos a crecer otra vez. Ahora hay 2000 casas”.

Gutiérrez comenta también cómo le sorprendió lo que sucedía en la 15, cada vez que “llegaba la Navidad o el Año Nuevo y los vecinos se reunían en las calles para festejar juntos”. Los vecinos se reiteraban en el diagnóstico:

...“la villa no es como era antes”...; “antes podíamos estar juntos”...; “antes las casitas eran de puertas abiertas, ahora hay rejas y todos desconfían de todos”...

Así como en el conurbano, desde 1981, comenzó a crecer el fenómeno de los asentamientos y tomas de tierra, en Capital muchos de los expulsados -de las villas, de hoteles e inquilinatos, de las casas que alquilaban o de las que fueron demolidas para la construcción de autopistas- comenzaron a tomar viviendas. Existieron casos puntuales, como el de las manzanas que iba a ocupar la autopista AU3, que analizaron Hilda

Herzer y otros investigadores en un trabajo sobre ocupación de inmuebles. Es en ese tipo de lugares donde comenzarían a mezclarse los tantos. Pistas de lo que con los años se llamaría “la guerra de pobres contra pobres”. Pistas también de cierto chiste anclado en el imaginario popular, el del cartel en la villa que dice “Bienvenida clase media”. Uno de los ocupantes de esa zona, decía:

-Aquí está todo mezclado... había venido mucha gente de afuera, de villas. Esta zona se había puesto terrible, terrible.

En una nota de El Porteño, de 1984, dedicada a los habitantes de esas manzanas semivacías de Coghlan, Villa Urquiza y Saavedra, un joven padre de familia era sintético:

-Yo, si encuentro algún lugar, agarro y, pum, me meto.

Más allá del fenómeno puntual de las tomas de inmuebles públicos o privados -unas 500, sólo entre las judicialmente denunciadas, a fines de los '90- en todas estos años, como quedó dicho, las villas se fueron repoblando, cargando viejos y nuevos problemas, viejos y nuevos miedos. Los efectos del terror fueron devastadores y a ellos se sumaron los del punterismo político. El padre Pichi, que hasta 1992 vivió en la piecita de arriba del almacén, dice sobre las villas de Retiro que están “hiperfragmentadas, hiperclientelizadas. Internas de internas de internas”. El Sobreviviente C oscila entre dos posturas. En uno de los papeles escritos a mano para la entrevista asegura entre signos de admiración que “no es cierto que (el militarismo, el terror) genere corrección y miedo en la población. ¡También son un desafío que generó rebeldía, respuesta contestaria, puebladas reivindicativas!”. Pero ya más calmo, en la conversación personal, su fiereza combativa da paso a un quiebre igualmente fulero que tiene que ver con lo que ve a su alrededor como efecto del miedo, la pobreza y el clientelismo, el aislamiento de la gente y una necesidad de salvación personal que denomina “el virus de la atomización”.

Testimonios de militantes villeros contemporáneos, rescatados de una nota de la revista 3puntos sobre elecciones y pobreza, publicada al filo del cambio de milenio:

“Acá es cosa de todos los días pero ocurre con todos los partidos, incluso los más progresistas. Abren un kiosco nada más que para las internas o las elecciones. Vienen con sus coches cero kilómetro y sus combis y hacen una vil compra del voto por una bolsa de mercadería. El puntero cobra por eso”.

“Es que nosotros laburamos siempre y los punteros laburan un año o seis meses antes de las elecciones. Vienen con su paquete de arroz o azúcar y lo destruyen todo. Es tanta la miseria. Se nos acerca gente de todo tipo para salvarse como concejal, gente que puede estar al pedo, haciendo política entre comillas hasta las tres de la mañana. Pero lo que hacen los punteros con los aparatos no es política, política hace el FMI y todos los pulpos. Los punteros hacen migajas”.

“Hay un pibito que ya aprendió todo. Si vienen los menemistas canta “Menem lo hizo”; si asoman los de la Alianza, canciones de la Alianza; y si cae la izquierda entona Aprendimos a quererte... Sobrevive así, se liga unas monedas”.

“Nosotros queremos continuidad, no regalamos paquetes de arroz. Y tratamos de sobrevivir en un barrio donde hay alcohol, droga, sida y gente que viene a prometernos cosas. Además de que tenemos que trabajar y mantener a nuestra familia, peleamos con los punteros y tenemos que ser punteros en nuestra familia. ¿De qué vale que seas un buen puntero si como padre sos un sorete?”.

Juan Cymes oscila en su respuesta, un poco como el Sobreviviente C, aunque de manera menos extrema. Reconoce por un lado que, después de largos años de castigo, “la gente no quiere ni oír hablar de organización”, dice que pese a todo “no consiguieron quebrarnos” y establece una dualidad entre cierta “dignidad” en los niveles organizativos a los que suelen llegar los villeros -a menudo destruidos por las intervenciones institucionales y partidarias- y el contenido o propuesta de esas mismas organizaciones.

Magtara Feres, siempre hablando de los cambios y los miedos en la gente, da su versión, dulce y coqueta, de buena vecina del barrio:

-En ese tiempo comenzó a entrar la droga. Yo no sabía que existía la droga. Decían que existía pero entre la clase alta. Los chicos jóvenes comenzaron a cambiar, quién sabe si para perder el miedo. Era un barrio pobre que no era para droga. Los chicos terminaron drogadictos, muertos, muertos por SIDA, o por la droga, o por la policía. Eso fue fundamental, fue una cosa de terror. Porque quedó una marca que nunca más se fue. Porque jamás el barrio volvió a ser lo que era, ni la gente. Porque después, cuando se volvió a poblar, ya la gente no era igual, era desconfiada, habíamos perdido todo lo bueno. El barrio era tan honesto. Siempre digo que podíamos dormir con las puertas abiertas. El más pobre te venía a pedir, “No tiene un pan” o a algo así, pero no te iba a robar. Cambió la gente..., cambió.

En aquella nota ya vieja de El Porteño del año 1986, en plena conversación con el dirigente Efraim Medina Arispe, aparecía una larga secuencia en la que se describía la irrupción en la charla de una familia recién llegada a la villa. Un muchacho boliviano de apellido Zambrano acababa de entrar en la 31 con una chata en la que transportaba la casilla y cinco hijos argentinos. En la larga negociación, que oscilaba entre lo dramático, lo cómico y lo terrible, Medina intentaba vanamente desalentar la instalación de Zambrano, pidiéndole documentos, repasándole las historias de la dictadura, aludiendo a las maldades que pudieran hacer la policía y el juez. Pero insistía mansamente Zambrano, pidiendo nada más que un terreno donde instalarse, “un pagüiche como se dice, ¿no?”. Resistió Medina hasta donde pudo y el cronista no pudo conocer el desenlace de la conversación, salvo por lo que pudiera anunciar un párrafo final:

-Nosotros acá hemos hecho todo lo que se puede. Le hemos ayudado a la gente acá en la villa a que se acomoden biencito; ya no queremos que sea villa. Sino que sea un barrio de trabajadores, ¿no?... Entonces yo quisiera por mi parte, le pido, vaya un ratito a la 46. Si se compromete a que no tenga lío usted y el otro que está metido, encantado.

Pasaron quince años desde entonces, y 25 desde la instauración de la dictadura. Hay un similar trasfondo al que alude Magtara, sobre el final de la conversación, junto a Johny Tapia, al que siguen sin alcanzarle las raciones para el comedor popular bautizado con el nombre de Mugica. Es cuando Magtara dice, ya fuera de grabación, y refiriéndose siempre a los cambios sufridos por el país:

-Antes nos despertábamos cuando pitaban las fábricas. Ahora están todas cerradas.